

FOJA: 726 .- .-

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia
JUZGADO : 4º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-5625-2014
CARATULADO : VÁSQUEZ / SUPERINTENDENCIA DE
QUIEBRAS

Santiago, veintidós de Agosto de dos mil diecinueve

VISTOS:

A fojas 3 y siguientes, comparece don **DANIEL ISAÍAS VÁSQUEZ MEDINA**, ingeniero comercial, contador auditor, ex síndico privado de quiebras, domiciliado en Ernesto Muzard N° 2065, departamento 603, Providencia, e interpone demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios, en contra de la **SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO**, institución estatal autónoma, representada legalmente por doña Josefina Montenegro Araneda, abogada, o quien la subrogue, reemplace o suceda legalmente, ambos con domicilio en Huérfanos N° 626, Santiago, y en contra de don **DIEGO ABDÓN LIRA SILVA**, abogado, domiciliado en Las Ñipas N° 4220, Vitacura.

A fojas 71, contestó el demandado Diego Lira Silva.

A fojas 90, contestó la demandada Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.

A fojas 128 y 149, se evacuó la réplica por el demandante.

A fojas 163, evacuó la réplica el demandado Diego Lira Silva.

A fojas 167, evacuó la réplica la demandada Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.

A fojas 193, se llevó a efecto la audiencia de conciliación, con la sola asistencia del apoderado de la parte demandante.



Llamadas las partes a conciliación, ésta no se produjo.

A fojas 199, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que consta en autos.

A fojas 723, se citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, don **DANIEL ISAÍAS VÁSQUEZ MEDINA**, demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios, a la **SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPREDIMIENTO** y a don **DIEGO ABDÓN LIRA SILVA**, a objeto que se declare su obligación de reparar el lucro cesante y el daño moral que se le ha causado, condenándoseles a pagar a su parte, la suma de UF 58.465,2367, equivalentes al día 09 de abril de 2015, a la suma de \$1.382.187.184, más reajustes e intereses, con costas.

Manifiesta que el día 16 de junio del año 1997 fue nombrado síndico privado de quiebras del convenio preventivo judicial de la empresa proponente “Protenn's S.A.”, tramitada ante el 10° Juzgado Civil de Santiago, en causa Rol 1517-1997.

Refiere que dentro de los bienes de la masa de la proponente, había una máquina con prenda industrial a favor del Banco A. Edwards -hoy Banco de Chile-.

Indica que dos ciudadanos argentinos le manifiestan por escrito oferta de compra de dicho bien prendado, dada su calidad de síndico interventor y liquidador de dicho convenio. Es así que el 29 de enero del año 1999, el Banco Edwards lo autorizó por escrito a vender dicho bien en la suma de \$22.000.000, entregando los ciudadanos directamente al banco un cheque por la suma indicada, como garantía de la seriedad de la oferta.

Señala que el Banco A. Edwards, recibió dicho documento y transcurridos varios meses desde la recepción, lo remitió al 10° Juzgado Civil de Santiago, donde se tramitaba el proceso del convenio preventivo judicial.



Por su parte, los ciudadanos argentinos trasladaron la máquina hacia Argentina, sin darle aviso de aquella circunstancia, habiendo sido previamente autorizados a desarmarla y mantenerla en un lugar definido en la ciudad de Santiago, a la espera de la autorización del Banco A. Edwards para concretar su venta. Agrega que al no encontrar dicho bien donde debería haber estado en custodia, interpuso querrela criminal contra los ciudadanos argentinos y quienes resultaren responsables, en causa Rol N° 81.688-5 seguida ante el 2° Juzgado del Crimen de San Miguel.

Relata que el 11 de diciembre de 2002, el superintendente de quiebras de la época, Sr. Diego Lira Silva, interpuso una denuncia criminal en su contra, por una supuesta apropiación indebida de la máquina, originando con ello la causa Rol 90.071-3, del 2° Juzgado del Crimen de San Miguel, denuncia de la que nunca fue notificado por la Superintendencia de Quiebras.

Sostiene que a consecuencia de una citación emanada de dicho juzgado del crimen fue detenido por la Policía de Investigaciones de Chile el día 17 de septiembre de 2003, en su oficina de calle Amunátegui N° 86, mientras celebraba una junta de acreedores de la quiebra Fernando Barraza Passalacqua, del 2° Juzgado Civil de San Miguel. Precisa que la orden de detención emanó de la causa sobre denuncia criminal y a petición expresa de la Superintendencia de Quiebras, fue llevado ante el Sr. Juez de la causa, quien le tomó declaración indagatoria y lo dejó en libertad por falta de méritos.

Afirma que, no obstante tratarse solo de una denuncia, la Superintendencia de Quiebras tomó parte activa en dicho proceso, solicitando todo tipo diligencias, vulnerando con ese proceder ilegal, todas las leyes sobre el procedimiento criminal y, además, las leyes que regulan las obligaciones de los funcionarios públicos, que le impedían haber obrado como lo hizo.

Manifiesta que a raíz de este proceso y de otras 15 querellas que presentó en su contra el Sr. Lira Silva, en su calidad de superintendente de quiebras, el día 23 de diciembre de 2003 presentó su renuncia voluntaria al cargo de síndico privado de quiebras, para ante el ministerio de justicia, señalando en ella las razones en que la fundaba, indicando textualmente: “he



sido objeto como síndico, de la conducta del Superintendente de Quiebras, don Diego Abdón Lira Silva y del Abogado Jefe de la Superintendencia de Quiebras, don Héctor Patricio Navarrete Aris, que se ha traducido en abierta animosidad y tratamiento discriminatorio, me he visto sometido a un proceso de desprestigio sistemático de mi imagen profesional, todo ello valiéndose de la credibilidad que les otorga el cargo que ostentan, excediéndose en la labor fiscalizadora”.

Relata que con fecha 16 de agosto de 2005, el Sr. Diego Lira Silva, procedió a querellarse en su contra, en el ejercicio de una supuesta acción pública por los mismos hechos de la denuncia, no obstante estar claramente definida su inocencia en los hechos, dado que se sabía exactamente donde se encontraba la máquina y como fue sacada del país, careciendo, además, el Sr. Lira de facultades legales para haberse querellado, con una clara intención de seguir dañando su honra y dignidad.

Agrega que, con fecha 14 de septiembre de 2005, don Diego Lira solicitó se dictara auto de procesamiento en su contra, a lo que el Tribunal accedió el día 05 de octubre del mismo año, siendo detenido en su oficina con fecha 13 de octubre y llevado al Centro de Detención Preventiva de San Miguel, ingresando en esa misma fecha en un sector común de dicho lugar de detención para internos procesados y condenados.

Expresa que a consecuencia directa del auto de procesamiento, se le difamó por la prensa escrita y fue mantenido en prisión preventiva durante más de cinco meses. Indica que solicitó la libertad en más de 10 ocasiones, pero en todas se opuso tenazmente la Superintendencia de Quiebras, hasta que el día 15 de marzo del año 2006 la tercera sala de la ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel le otorgó la libertad, previa fianza.

Refiere que con fecha 06 de octubre de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la República de Chile, el Decreto Presidencial de la Sra. Michelle Bachelet Jeria N° 889, de fecha 14 de julio del año 2006, aceptando su renuncia a la actividad de síndico privado de quiebras.

Hace presente que ambas causas criminales relativas a la máquina, fueron acumuladas a solicitud de su parte, esto es, la denuncia de la



Superintendencia de Quiebras en su contra y la querella que interpuso en contra de los ciudadanos argentinos.

Expresa que con fecha 12 de agosto de 2008, la tercera sala de la ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, dejó sin efecto el auto de procesamiento que fuera decretado en su contra -y que originó que estuviera detenido durante cinco meses y tres días-, no obstante la oposición tenaz de la Superintendencia de Quiebras.

Señala que posteriormente, el día 23 de diciembre del año 2010, atendida su total inocencia en los hechos de los cuales se le acusó injustamente, se dictó el sobreseimiento temporal de la causa abierta en su contra por la Superintendencia de Quiebras.

Destaca que el Sr. Diego Lira Silva siempre estuvo en total conocimiento de su inocencia y no obstante aquello, insistió en incriminarlo, lo que consta en el proceso. Indica que agrava todo lo anterior, el hecho que al interponer la querella en su contra, el superintendente de quiebras carecía de facultades legales para haber interpuesto dicho libelo criminal, toda vez que el artículo por él invocado, esto es, el artículo 93 del Código de Procedimiento Penal se lo impedía, puesto que la Ley de Quiebras fue modificada con fecha 31 de mayo del año 2002, a través de la Ley 19.806, que derogó el numeral 8 del artículo 8, que era la disposición legal que lo facultaba para querellarse en contra de los síndicos, pero solo en las quiebras, nunca en los convenios preventivos, como el que se tramitó ante el 10° Juzgado Civil de Santiago.

Sostiene que esa actuación ilegal e ilegítima, efectuada solo con la intención de desprestigiarlo es contraria a lo que estatuye la Constitución de la República de Chile, en específico a lo prescrito en sus artículos 6° y 7°.

Señala que el supuesto ofendido, perjudicado o legitimado activo en el proceso seguido en su contra por la Superintendencia de Quiebra, pudo haber sido el Banco A. Edwards, sin embargo, dicha institución financiera jamás accionó en su contra, no obstante estar en total conocimiento de la denuncia y posterior querella interpuesta.



Plantea que toda esta situación en la que se interpusieron en su contra 16 querellas criminales, terminó en una tragedia, causando la destrucción y fin de su vida laboral como síndico de quiebras y como persona, provocándole un daño enorme, cuyos efectos continúan hasta la actualidad.

Refiere que en este sentido, los daños que ha sufrido en términos económicos son los siguientes:

1. Lucro cesante por el fin de la actividad de síndico:

Sostiene que lo ha determinado teniendo en cuenta los años que pudo llegar a ejercer la actividad de síndico privado de quiebras, si no se hubiera visto en la obligación de tener que renunciar a dicha actividad, dada la cruenta persecución de la que fue objeto, por parte del Sr. Diego Lira Silva, en su calidad de superintendente de quiebras de la época, puesto que se vio forzado a dejar una actividad que le significó el haberse realizado profesionalmente, en un ámbito que le produjo muchos momentos de gratificación profesional, significó el reconocimiento de su familia, sus asesores, sus pares, las distintas personas que laboraron bajo su subordinación y dependencia, los ex trabajadores de las quiebras, acreedores, tribunales de justicia, abogados, etc. Sin embargo, tuvo que abandonar dicho proyecto de vida de forma obligada, no obstante sus deseos de continuar, por lo que ha considerado los valores históricamente percibidos como ingresos por dicha actividad, debidamente actualizados.

Es así que lo calcula a partir de la fecha en que se dictó por la Sra. Presidenta de la República de Chile, dona Michelle Bachelet, el Decreto Presidencial que aceptó su renuncia. Indica que a esa fecha tenía 44 años de edad y ocho meses cumplidos, restándole aun por trabajar 20 años y cuatro meses, hasta llegar a cumplir 65 años de edad para jubilarse.

Indica que durante todo el tiempo que ejerció el cargo de síndico privado de quiebras, en forma total percibió ingresos nominales por la suma de \$443.274.894, ajustando los ingresos a UF el día de su recepción, se tienen cifras reales, lo que resulta en un valor de UF 26.890,9272. Señala que una vez obtenido el valor real, se divide por el número total de meses que ejerció el cargo de síndico (desde el mes de julio del año 1996 hasta el mes de octubre



del año 2006) que corresponden a 118 meses, resultando un ingreso mensual actualizado de UF 227,8892, multiplicando dicho ingreso mensual por 245 meses, que son los números de meses que le restaban para jubilarse en forma legal, éste alcanza la suma total de UF 55.832,8574, valor que al ser transformado en Unidades de Fomento al día 09 de abril del año 2014 -que tenía un valor de \$23.641,18- obtiene la suma en pesos de \$1.319.954.632.

2. Lucro cesante por haber estado en prisión preventiva:

Refiere que lo ha determinado a partir del hecho de haber estado detenido cinco meses y tres días de manera injusta, sin haber podido ejercer como síndico privado de quiebras durante aquel lapso y tomando en cuenta para su determinación los ingresos mensuales históricos debidamente actualizados.

Señala que este concepto se obtiene de multiplicar el valor mensual de sus ingresos como síndico privado de quiebras antes determinado, multiplicándolo por el número de cinco meses de detención, lo que alcanza la suma de UF 1.139, 4461, al día 09 de abril del año 2014, equivalente a \$26.937.850.

3. Daño moral:

Manifiesta que estar injustamente querellado y procesado durante años, privado de libertad durante cinco meses y tres días, imputado como delincuente común, expuesto al escarnio e ignominia pública mediante publicaciones de prensa que le sindicaron como un peligro público, como autor de toda clase de delitos, es causa directa de los padecimientos físicos y psíquicos que ha tenido.

Expresa que producto de aquello, su caso particular fue expuesto públicamente en forma falsa y tendenciosa en el principal periódico de Sudamérica, el Diario el Mercurio de Santiago, y además en el Diario El Sur de Concepción, el diario más importante de la Octava Región, en el sentido de que era el primer síndico removido y procesado por graves delitos.

En relación a las publicaciones de prensa, afirma que ellas constituyeron un descrédito moral jamás visto en las quiebras hasta esa fecha, fue el primer



síndico expuesto en la prensa, a quien se le imputó incluso la comisión de delitos tan graves como la asociación ilícita, por lo que es lógico pensar que todo ello le hizo padecer un enorme daño moral, dolor tanto psíquico como físico, el descrédito ante la sociedad que afectó su credibilidad ante los Tribunales de Justicia, perturbando además, gravemente su vida familiar y laboral.

Destaca que el ejercicio de la actividad de síndico privado de quiebras se basa fundamentalmente en la confianza, en los hechos, el profesional debe ser una persona honesta, y allí surge también parte del daño moral, el cual es un rubro independiente y autónomo de todo otro daño, que implica un sufrimiento, el que entiende como el dolor padecido a causa de los actos dañosos cometidos por funcionarios de un organismo estatal, y como producto del enjuiciamiento público a través de los medios de prensa escrito.

Asevera que el daño moral causado por estos hechos, no puede menos que dimensionarlo en el monto exacto del valor que se le imputó falsamente haberse apropiado, en el equivalentes a la suma en UF 1.492, 9332, el que calcula de la siguiente forma: El valor de la máquina en pesos que le asignó el Banco A. Edwards, esto es, la suma de \$22.000.000, al día 26 de febrero del año 1999, se divide por el valor de la UF a ese día -y que era de \$14.736,19- dando como resultado el valor expresado en UF 1.492, 9332, monto que al día 09 de abril del año 2014 equivale a \$32.294.703.

En cuanto al derecho, invoca los artículos 38 de la Constitución Política de la República; 2 numeral 3 letra a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 4 de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; 8 y 11 del Decreto N° 873 del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre garantías judiciales; y, 2317 del Código Civil.

Concluye que la actuación del Sr. superintendente de quiebras de la época consistente en proceder a querellarse en su contra, sin tener facultades legales para ello y contra prohibición expresa de la ley, deviene dicha actuación en ilegal, ilegítima y efectuada solo con la intención de causarle



daño, por cuanto le estaba vedada por ley, y fue efectuada por él con la sola intención positiva de inferir daño a su persona.

Con relación a la prescripción, sostiene que la presente acción no se encuentra prescrita, toda vez que en la causa en la que se perseguía su presunta responsabilidad criminal, se dictó sobreseimiento temporal con fecha 23 de diciembre del año 2010, puesto que acreditó por todos los medios legales pertinentes su total y absoluta inocencia y además el Tribunal, a través de su investigación no logró desvirtuar la presunción constitucional de inocencia que lo amparaba.

Transcribe el artículo 2514 del Código Civil, señalando que para que pueda operar la prescripción, se deben dar dos condiciones o elementos, primero, el transcurso del tiempo sin haber ejercido una acción, pero además, se debe estar en posesión legal de poder exigirla. Es decir, en el presente acto solo está en condiciones de demandar una vez dictado el sobreseimiento temporal que la hace exigible.

SEGUNDO: Que, a fojas 71, contestó la demanda el demandado Diego Lira Silva, solicitando sea rechazada en todas sus partes, con costas.

I. Consideraciones generales respecto a la demanda.

Manifiesta que de la sola lectura de la demanda se desprende que la acción interpuesta está condenada al fracaso, ya que se sustenta en una versión distorsionada de los hechos, yerra sustancialmente en la aplicación del derecho invocado, hace caso omiso de la institución de la prescripción y desconoce en forma evidente los requerimientos mínimos para la atribución de responsabilidad civil extracontractual, tanto respecto del Estado, como de los individuos sujetos a las normas del derecho común.

Sostiene que de la lectura de la introducción de la demanda se tiene claridad respecto de las siguientes circunstancias:

i) El demandante recurre a la Constitución y al estatuto jurídico aplicable a la Administración del Estado para fundamentar su acción.



ii) La acción se dirige en contra de la ex Superintendencia de Quiebras y solidariamente en contra de su parte.

iii) Conforme al libelo el estatuto jurídico aplicable tanto a la Superintendencia de Quiebras como a su parte sería el mismo.

Refiere que de estas simples constataciones, puede observarse que resulta jurídicamente imposible hacer extensible a una persona natural -ciudadano común y corriente- el estatuto jurídico aplicable a la responsabilidad civil extracontractual de la Administración del Estado, ya que son entes distintos, para los cuales el derecho establece tratamientos disímiles. Sin perjuicio de lo que diga más adelante, resulta errado hacer responsable solidario a una determinada persona natural de los daños y perjuicios que supuestamente habría ocasionado el Estado, ya que las normas atributivas de ésta resultan inaplicables a las personas naturales. Así, queda de manifiesto que desde el planteamiento inicial, la demanda infringe normas básicas del ordenamiento legal, como las contenidas en el artículo 19 N° 3 de la Constitución, el artículo 4 del DFL N° 1/ 19.653 y artículos 17 y 18 del Código de Procedimiento Civil.

Expresa que en tal sentido, de la lectura de los hechos que relata el demandante, las supuestas acciones dañosas se derivan de la privación de libertad a la cual se vio sujeto el actor, a consecuencia del ejercicio irregular de su cargo como síndico de quiebras. Sin embargo, quienes determinan las privaciones de libertad son los tribunales de justicia, y no entidades administrativas como la ex Superintendencia de Quiebras y mucho menos las personas naturales, como es su caso. Por lo mismo, si fueron los propios tribunales de justicia los que decretaron la prisión preventiva del demandante, quiere decir que los antecedentes tenidos a la vista por la justicia criminal eran de tal relevancia que justificaban dicha medida.

Señala que la consecuencia de esta aseveración es de toda lógica: a un particular no puede hacerse responsable por los actos que ejecutan legítimamente dentro de la esfera de su competencia las distintas autoridades del Estado, resultando incomprensible que se pretenda hacer efectiva una responsabilidad patrimonial sobre un ciudadano y a la vez a la



Superintendencia de Quiebras y su superintendente, por resoluciones válidamente dictadas por los tribunales de justicia.

Sobre el particular, invoca jurisprudencia pronunciada por el Tribunal Constitucional en la sentencia Rol 1413-2009 y el artículo 8 de la Ley de Quiebras vigente a la época de los hechos, indicando que malamente podría acarrear responsabilidad civil el ejercicio de la obligación que la propia ley le ha impuesto a la entidad pública y, consecuentemente, a su representante.

Asevera que, en cuanto a la determinación de los perjuicios, el demandante pretende hacerlo responsable por lucro cesante producto del fin de su actividad como síndico, la que se produjo por su propia renuncia a dicha calidad.

Por su parte, las aspiraciones de perjuicios por daño moral, confunden al destinatario de la pretensión, ya que de lo expuesto en la demanda, se desprende inequívocamente que ésta se origina en las publicaciones de prensa que informaban respecto a la conducta irregular del Sr. Vásquez durante su ejercicio como síndico de quiebras, cuestiones que evidentemente no son de responsabilidad ni de la Superintendencia de Quiebras ni de su parte, quien jamás hizo declaración de prensa alguna en contra de dicho síndico.

En lo que dice relación con la prescripción, señala que conforme a lo expresamente indicado por el demandante en el libelo, los hechos que originarían el supuesto daño que pretende se indemnice, ocurrieron entre el día 11 de diciembre del año 2002 y el día 15 de marzo del año 2006, es decir, el último de ellos culmina hace nueve años y siete meses y varios días más. Pues bien, el artículo 2332 del Código Civil, es claro al señalar que “Las acciones que concede este título por daño o dolo, prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto”.

Hace presente que el señor Daniel Vásquez funda su acción en la querella presentada por su parte en su contra por alzamiento de prenda en agosto de 2005, y declara que debido a ella dejó de ser síndico y de ganar la suma de mil cuatrocientos millones de pesos. Sin embargo, lo cierto es que el señor Vásquez salió de la nómina nacional de síndicos por dos causales legales: por renuncia presentada ante el ministerio de justicia (N° 9 del



artículo 22 del Libro IV del Código de Comercio) y por habersele rechazado la cuenta de la quiebra de “Cosméticos Internacionales Limitada” por el Tribunal de la causa (N° 10 del mismo artículo). Ninguna de ellas imputable a los demandados, ya que la primera se origina por un acto voluntario del propio síndico y la segunda por resolución judicial de 26° Juzgado Civil de Santiago.

II. Facultades y obligaciones de la superintendencia de quiebras.
Contexto en que se produjeron los hechos en que se basa la demanda:

Manifiesta que la demanda impetrada se presenta habiendo transcurrido más de una década desde que acontecieron los hechos, por lo que de su sola lectura se desprende que los hechos se encuentran prescritos.

Para mayor comprensión, analiza todos y cada uno de los antecedentes que significaron el procesamiento y remoción del exsíncico Daniel Vásquez:

1. Atribuciones y obligaciones de su parte, quien a la fecha detentaba el cargo de superintendente de quiebras.

Sostiene que en la dirección de dicha institución, entre otras atribuciones y deberes, le correspondió, en conformidad al artículo séptimo de la Ley de Quiebras de la época “supervigilar y controlar las actuaciones de los síndicos”, es decir, la fiscalización de todos los síndicos en el desempeño de sus distintas funciones”. A mayor abundamiento, la Superintendencia de Quiebras es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia y su actuación se enmarca dentro de su ley orgánica, en ese entonces la Ley N° 18.175, de 1982.

Refiere que con ocasión de las distintas fiscalizaciones ordinarias y extraordinarias que en cumplimiento del mandato legal ejercían los distintos funcionarios fiscalizadores de la Superintendencia de Quiebras, tomó conocimiento de una serie de irregularidades y presuntos ilícitos en que el síndico Daniel Vásquez habría incurrido en el ejercicio de sus funciones con ocasión de la administración de diversas quiebras y convenios.

En este contexto, y en el cumplimiento del mandato que por ley se le asigna a la Superintendencia de Quiebras, se dedujeron distintas acciones en contra del Sr. Vásquez Medina, entre las cuales destacan:



i) Causa Rol 93.623-03 (sic), seguida ante el 2° Juzgado del Crimen de San Miguel, en la que el tribunal con fecha 05 de octubre de 2005, somete a proceso a Daniel Vásquez Medina como autor del delito de alzamiento de prenda perpetrado en el Convenio Judicial de “Prottens S.A.”. Dicho procesamiento fue confirmado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, con fecha 17 de octubre de 2005.

Precisa que la Superintendencia tenía amplias facultades de fiscalización de los síndicos en todos los aspectos de su administración, incluidos los convenios, tal como se desprende del artículo 7° de la Ley de Quiebras ya citada, que estatúa que le corresponde supervigilar y controlar las actuaciones de los síndicos. Si el proyecto de ley confeccionado en la misma Superintendencia de Quiebras, que modificó la Ley N° 18.175, agregó en el N° 1 del artículo 8° la palabra “convenios”, fue justamente para aclarar esta atribución que siempre tuvo, y que el mismo señor Vásquez desconocía.

Indica que en la causa de que se trata, quien efectivamente no tenía facultades para vender la valiosa máquina de propiedad de “Prottens S.A.”, era el señor Vásquez, ya que en dicho caso él no actuaba como síndico en una quiebra, sino como interventor en un convenio, con las solas facultades que el artículo 200 de la Ley 18.175 otorgaba a los interventores. Entre estas facultades no estaba contemplada la de vender bienes de la empresa en convenio. Menos aún la de cometer alzamiento de prenda, y por último sin duda alguna no podía el interventor vender un bien ajeno, contraviniendo la ley, y ni siquiera enterando su precio al legítimo dueño, como ocurrió.

ii) Causa Rol 217.501-3, seguida ante el 4° Juzgado del Crimen de Santiago, en la que con fecha 31 de agosto de 2006, el tribunal sometió a proceso a don Daniel Vásquez Medina por el delito de apropiación indebida, ilícito cometido en la quiebra “Fernando Barraza Passalacqua”. Esta resolución fue confirmada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 27 de septiembre de 2006.

Precisa que al momento en que el exsíncico fue sometido a proceso su parte ya no ejercía cargo alguno en la Superintendencia de Quiebras, toda vez que se puso término a su nombramiento con fecha 06 de abril de 2006.



iii) Causa Rol N° 1456-RC del 1° Juzgado de Letras de Tomé, por el delito previsto y sancionado en el inciso 1° del artículo 38 de la Ley de Quiebras, en la quiebra “Maderas Dichato Ltda.”.

iv) Causa Rol N° 5224-3 del 2° Juzgado de Letras de Coronel, por el delito previsto y sancionado en el artículo 38 de la Ley de Quiebras, en la quiebra “Sociedad Comercializadora Campo Sur S.A.”.

v) Causa Rol N° 2717-4, Tomo VII, seguida ante el 32° Juzgado del Crimen de Santiago, por el delito de apropiación indebida, en la quiebra “Cosméticos Internacionales Ltda.”.

vi) A su vez y a petición de distintos acreedores, el 26° Juzgado Civil de Santiago, con techa 26 de marzo de 2004 removió al entonces síndico de quiebras Sr. Daniel Vásquez Medina de la administración de quiebra “Cosméticos Internacionales Ltda.”, por haber incurrido en faltas graves y reiteradas y en irregularidades en su desempeño, en causa Rol N° 1973-1977. Dicha resolución fue confirmada por la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 15 de julio de 2005.

Expresa que la Excelentísima Corte Suprema por resolución de fecha 05 de enero de 2006, declaró inadmisibles los recursos de casación en la forma y fondo interpuestos por el señor Vásquez, confirmando de esta manera la sentencia dictada por el magistrado del 26° Juzgado Civil de Santiago, ya citada.

Detalla que el fallo de fecha 15 de julio de 2005 en su considerando noveno señala: “...este sentenciador ha llegado al pleno convencimiento de que están probadas las siguientes irregularidades:

1. Continuación del giro más allá de la época estipulada sin aprobación desde el día (...).

2. La no exhibición de documentos respaldatorios de su gestión, lo que constituye infracción a las instrucciones generales de carácter obligatorio que ha dictado la Superintendencia de Quiebras.



3. Obstaculización de la labor fiscalizadora; el desacato a hacer entrega de la documentación; presentación de la renuncia a su cargo en esta instancia sin ocurrir ante la junta de acreedores, la falta de interés demostrada durante su periodo por instar (...)”.

vii) Con fecha 18 de mayo de 2004, el síndico Sr. Vásquez Medina fue removido también de la quiebra “Comercializadora Campo Sur S.A.”, que se tramitaba ante el 1° Juzgado de Letras de Coronel.

III. Fundamentos jurídicos para el total rechazo de la demanda.

1. La excepción de prescripción.

Manifiesta que el demandante sostiene que los hechos de marras habrían ocurrido entre los años 2002 y 2005, por lo que teniendo en consideración lo dispuesto en los artículos 2314 y 2332 del Código Civil, ha operado la institución de la prescripción, por lo que opone esta excepción.

En subsidio, opone la excepción de prescripción extintiva contemplada en los artículos 2514 y 2515 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría producido el daño y la fecha de notificación de la demanda de autos ha transcurrido en exceso el plazo de cinco años contemplado para ejercer la acción ordinaria.

2. Jurisprudencia. Prescripción.

Sobre la materia, cita las siguientes sentencias:

2.1. Sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, en causa Rol N° 66-2005.

2.2. Sentencia de la Excelentísima Corte Suprema, en causa Rol N° 123-2009.-

3. No resulta jurídicamente posible que una persona natural sea solidariamente responsable con el Estado.

Afirma que no resulta jurídicamente atendible que una persona natural sea solidariamente responsable de los supuestos daños ocasionados por el



Estado cuando dicha persona detenta la calidad de jefe del servicio en cuestión.

Lo anterior se fundamenta en que la responsabilidad extracontractual del estado se encuentra estructurada en virtud de la falta de servicio, la cual resulta única y exclusivamente atribuible al Estado y no al funcionario por medio del cual se materializa la acción del Estado.

Refiere que la falta de servicio se traduce en una mala organización o mal funcionamiento del servicio público en cuestión, el cual se aparta de lo que debiera ser su comportamiento normal, habida consideración de la función que la ley le ha encomendado y de los medios de que dispone.

Es decir, la responsabilidad civil del Estado es consustancialmente excluyente de la responsabilidad civil del funcionario; por cuanto la atribución de responsabilidad respecto de uno, resulta incompatible con la atribución de responsabilidad respecto del otro. Las categorías evaluativas respecto a los presupuestos de admisibilidad de ellas son claramente distintas, no siendo extrapolables los criterios de una a la otra o viceversa.

En otros términos, dado que la atribución de responsabilidad civil extracontractual del Estado se encuentra configurada al amparo del concepto de falta de servicio, la eventual falta del funcionario no interesa, solo importa la falta de servicio, por consiguiente, el funcionario no responde civilmente ante la víctima. Lo anterior, por cuanto de no mediar la actuación del funcionario, no podría imputarse una actuación irregular al Estado y, por tanto, falta de servicio. A la inversa, si quien actúa indebidamente es el funcionario, ello excluye la responsabilidad del Estado, por cuanto no puede visualizarse falta de servicio en dicha actuación.

4. La falta de servicio de los organismos públicos.

Expone que la responsabilidad por el daño que causen por falta de servicio los órganos de la Administración del Estado, se encuentra establecida en el artículo 42 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Sin embargo, el demandante no ha



precisado en que consiste la falta de servicio en que habría incurrido la Superintendencia de Quiebras y solidariamente su parte.

Plantea que la falta de servicio habría consistido precisamente en no haber protegido el bien público comprometido en todo juicio de quiebras. En haberse olvidado que el Estado, a través de la Superintendencia de Quiebras, debe velar por la fe pública en los procedimientos concursales. Señala que es así que, precisamente, actuando en representación de los acreedores de la quiebra, evitando el daño patrimonial a que se vería enfrentada la masa de acreedores, es que dicho organismo público ejerció las acciones legales tendientes a que el síndico rindiera la cuenta de su administración, documentada y justificada, en los juicios que ha indicado: quiebras “Cosméticos Internacionales Ltda.”, “Fernando Barraza Passalacqua”; “Comercializadora Campo Sur Ltda.”, Convenio Judicial “Prottens S.A.”; y, “Maderas Dichato Ltda.”.

En consecuencia, la falta de servicio de la Superintendencia de Quiebras, como se ha dicho, la habrían invocado los acreedores de las quiebras bajo la administración del señor Vásquez, (trabajadores, Fisco de Chile, acreedores bancarios, organismos previsionales, etc.) ante la eventual negligencia u omisión de la Superintendencia en el cumplimiento de la ley, esto es, en no haber realizado la fiscalización a la gestión del síndico.

5. Los supuestos de la responsabilidad civil extracontractual.

Sostiene que para que en la especie se dé la responsabilidad extracontractual es necesario que concurren copulativamente tres requisitos, a saber: (a) Que el autor del daño haya actuado con culpa o dolo; (b) Que exista daño; y (c) Que exista relación causal entre el hecho doloso o culposo y el daño.

Sin embargo, el ejercicio de las atribuciones o deberes que impone la ley a la Superintendencia de Quiebras en su labor fiscalizadora respecto de los síndicos privados de quiebras, jamás podrá constituir un hecho ilícito personal; por ello no puede configurarse el supuesto de la responsabilidad extracontractual.



A continuación explica y desarrolla cada uno de los presupuestos de la responsabilidad reclamada, concluyendo que en la especie no concurre ninguno de ellos y reiterando que el demandante señala que el perjuicio se le ha causado porque no pudo ejercer la profesión de síndico, debido a la querella presentada por su parte ante el 2° Juzgado del Crimen de San Miguel, el 16 de agosto de 2005, por alzamiento de prenda y apropiación indebida. En esa causa, en atención a la querella y al informe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, BRIDEC, fue sometido a proceso por el tribunal el 05 de octubre de 2005, y confirmado por la Corte de Apelaciones de San Miguel el 17 de octubre de 2005. Además, la respectiva Corte de Apelaciones le negó en diez ocasiones la libertad provisional pedida, por lo que la afirmación de que la señalada querella sería la causa de los perjuicios sufridos por no haber podido continuar como síndico no corresponde, toda vez que el señor Vásquez dejó de ser síndico de quiebras y salió de la nómina nacional por un acto voluntario propio que es su renuncia, y por una resolución judicial, que es el rechazo de una cuenta en una quiebra. En ninguna de dichas causales de exclusión él tuvo participación.

A mayor abundamiento, relata que el señor Vásquez, ante la tardanza del ministro de justicia en aceptarle su renuncia, presentó un reclamo ante la Contraloría General de la República, en que afirmaba que la no aceptación de la renuncia le causaba un serio perjuicio profesional, porque en la Ley de Quiebras existían una serie de incompatibilidades e inhabilidades de los síndicos, y a él, por mantenerse en esa calidad en la nómina de síndicos, se le estaba privando del legítimo y libre ejercicio de su profesión de contador auditor y de ingeniero comercial en las quiebras, dada su experiencia en ese campo. Esto motivó un oficio del contralor al ministro de justicia en que le instruía aceptar de inmediato esta renuncia.

6. Jurisprudencia sobre la prueba del daño moral.

Cita la sentencia dictada por la Excelentísima Corte Suprema con fecha 04 de junio de 2012, en causa Rol N° 9510-2009.

7. De la prueba de los daños morales extracontractuales.



Expone doctrina del profesor José Luis Diez Schwerter, contenida en su libro “El daño extracontractual, Jurisprudencia y Doctrina”, edición año 1997, páginas 146 a 149.

8. Ley N° 19.733 de 2001, sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo.

Plantea que si el demandado estima que el reportaje aparecido en la revista Que Pasa y/o el publicado en el diario El Sur de Concepción, le hubiere causado una deshonra o descrédito a su persona, debió haber accionado en contra del director del medio de prensa, según lo dispone el artículo 39 y 40 de la Ley 19.733.

El primero consagra la responsabilidad civil y penal por los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio del periodismo y el segundo, hace referencia a la acción civil que emana de los delitos de injuria y calumnia, dando derecho al ofendido a demandar daño moral.

TERCERO: Que, a fojas 90, contestó la demanda la demandada Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, solicitando sea rechazada en todas sus partes, con costas.

I. Excepción de prescripción.

Manifiesta que sin perjuicio de controvertir los hechos tal como fueron expuestos en la demanda, la acción deducida se encuentra prescrita, puesto que ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción que establece el artículo 2332 del Código Civil, el que debe contarse entre la fecha en que se produjo el o los hechos generadores del daño y la fecha en que fue notificada la demanda a su parte, esto es, el día 07 de mayo de 2014.

En efecto, en cuanto a la denuncia, querella y posterior orden de detención, precisa que la investigación criminal correspondiente solo fue sobreseída en forma temporal en virtud de lo dispuesto en el artículo 409 N°1 del Código de Procedimiento Penal, de lo que se sigue que al imputado no se le ha absuelto del delito que se le atribuía, sino que solo se suspendió el procedimiento criminal hasta que se presenten mejores datos de investigación



o cese el inconveniente legal que haya detenido la prosecución del juicio (artículo 418 inciso 3° del Código de Procedimiento Penal).

Recuerda que el actor imputa responsabilidad al fisco por la denuncia y posterior querrela criminal deducida en su contra por la Superintendencia de Quiebras, por haber sido imputado como delincuente común y por su posterior privación de libertad. Por consiguiente, el sobreseimiento temporal de la investigación criminal en la que dichos actos se produjeron no tiene injerencia en la producción del daño que el actor señala haber sufrido, por lo que concluye que resulta incorrecto computar -como se pretende de contrario- el plazo de prescripción desde la fecha en que se sobreseyó la causa, sino que debe realizarse desde que se perpetraron los actos que habían generado el daño reclamado.

Por su parte, en cuanto a la imputación en orden a que el demandante se habría visto obligado a renunciar a su cargo de síndico debido a la situación judicial que debió enfrentar, también se cumple en la especie lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, puesto que como el propio actor lo ha señalado en su libelo, el día 23 de diciembre 2003 presentó la renuncia a su cargo y el 06 de octubre de 2006 fue publicado en el Diario Oficial el Decreto Supremo que aceptó su renuncia; de lo que se sigue que ha transcurrido con creces el plazo de 4 años que prescribe la citada norma.

Por último, en cuanto a los supuestos actos difamatorios, señala que las publicaciones de prensa a que se refiere el actor -que nada dicen relación con el caso de autos-, corresponden a una publicación de la revista Qué Pasa de 15 de noviembre de 2002; dos publicaciones en el diario El Sur de Concepción, de 15 de marzo de 2003 y 17 de abril de 2003 y a una publicación en el diario El Mercurio de 31 de marzo de 2004; de lo que concluye la total prescripción de la acción deducida en autos, por lo que opone la excepción del artículo 2332 del Código Civil.

En subsidio, para el evento que se estimare que esa norma no es aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de cinco años contemplada en los artículos 2514 y 2515 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el supuesto derecho a



indemnización, esto es, desde la producción del daño y la fecha de notificación de la presente demanda, ha transcurrido con creces el plazo que establece el citado artículo 2515 del Código Civil.

II. En cuanto al fondo.

1. Consideraciones relativas a los hechos.

a. Antecedentes de la gestión del exsíndico don Daniel Vásquez Medina.

Sostiene que tal como ha sido expuesto en las otras demandas civiles deducidas por el actor ante este mismo Tribunal -de las cuales ninguna ha prosperado- en autos Rol 31.980-2010, 15.281-2011, 15.845-2011, 29.562-201, 30.084-2011 y 13.125-2012, durante el año 1999, en el ejercicio de la labor fiscalizadora de la Superintendencia de Quiebras, se advirtieron diversas irregularidades en la gestión del Sr. Vásquez como síndico.

Así, por ejemplo, fueron pesquisadas irregularidades en la quiebra “Cosméticos Internacionales Limitada”, tramitada ante el 26° Juzgado Civil de Santiago bajo el Rol N° 1973-1997, -que el señor Vásquez Medina administraba-, las que consistieron, básicamente, en la decisión del actor de continuar el giro de la fallida, mas allá de los plazos señalados en la legislación concursal y con él como administrador del giro, y en la no presentación en su oportunidad del balance final de la continuación del giro con su correspondiente estado de resultados obtenidos en esa gestión a la junta de acreedores, entre otras graves irregularidades, lo que trajo como consecuencia que por resolución de fecha 26 de marzo de 2004, el Juez del 26° Juzgado Civil de Santiago dispusiere la remoción de su calidad de síndico de la quiebra en comento.

Asimismo, en diferentes quiebras y convenios judiciales en las que intervino el actor, como “Arquitecturas de Interiores Studio Cuatro Ltda.”, “Comercializadora Campo Sur S.A.” y “Maderas Dichato Ltda.”, se detectaron numerosas irregularidades cometidas por el actor, tales como enajenaciones fuera de los casos de excepción previstos en el artículo 121 de



la Ley 18.175, gastos observados, verificaciones de créditos con preferencias inexistentes, alzamiento de prendas, etc.

Además, en materia penal se entablaron por su parte cuatro querellas criminales en contra del señor Vásquez, en relación a su gestión como síndico: en dos quiebras por el delito de concertación del artículo 38 de la Ley 18.175, en una, por apropiación indebida de dinero, y en la otra, por el delito de alzamiento de prenda, que es precisamente la querella que es objeto de la presente demanda.

b. Respecto a la denuncia y querella deducida por el ex superintendente de quiebras y la información de prensa.

Expresa que la demanda civil de autos funda su pretensión indemnizatoria en el hecho de que el ex superintendente de quiebras, Sr. Diego Lira Silva, habría denunciado al actor y posteriormente deducido una querella criminal en su contra, sin tener facultades legales para ello.

Sobre el particular, aclara lo siguiente:

El día 11 de diciembre de 2002, denunció al Sr. Vásquez por el delito prescrito en el artículo 19 N° 2 de la Ley 18.112, sobre Prenda sin Desplazamiento, denuncia que se registró al momento de presentarse bajo el Rol 90.071-S. Sin embargo, posteriormente se acumuló a la querella criminal interpuesta por el señor Vásquez en contra de determinados ciudadanos argentinos, figurando ambas con el Rol N° 81.688-5.

Indica que la referida denuncia se fundaba en el hecho que durante la actuación del actor, en calidad de síndico interventor y liquidador del convenio judicial de la empresa Protenns S.A., tramitado ante el 10° Juzgado Civil de Santiago en autos Rol N° 3957-1998, dispuso de un bien prendado sin el previo consentimiento del acreedor prendario, infringiendo la Ley 18.112, que actualmente se encuentra derogada.

Al respecto, relata que el día 03 de abril de 2002, es decir, con anterioridad a la denuncia presentada por su parte, el 10° Juzgado Civil de Santiago dictó sentencia en un incidente de nulidad de convenio judicial preventivo en contra de Protenns S.A., la cual en su considerando veintiséis



expresó: “Que, el Tribunal tiene presente que ha existido una fuga de bienes bajo la administración del Síndico y a vía de ejemplo se debe señalar la pérdida de la máquina inyectora de poliuretano, marca Niágara con sus accesorios y matrices, que fuera objeto de reclamación por parte del Banco A. Edwards, según consta de fojas 3.334 del Tomo XII del Convenio”.

Expone que al señor Vásquez le correspondió, en su calidad de síndico interventor y liquidador, la administración, custodia y liquidación de todos los bienes pertenecientes a la sociedad Protenns S.A. dentro de los cuales se encontraba una máquina rotativa para inyección de poliuretano, marca Niágara, modelo Super Miura, dos C Serie N° 1255-93, año 1986, reacondicionada en el año 1993, respecto de la cual se constituyó prenda sin desplazamiento a favor del Banco A. Edwards por escritura pública de fecha 04 de octubre de 1993, otorgada ante el Notario Público de Santiago don Martín Vázquez.

Sostiene que debido a que la citada máquina se encontraba prendada, el ex síndico Sr. Daniel Vázquez, no podía enajenar o constituir un derecho real sobre dicho bien sin el previo consentimiento escrito del acreedor prendario, el Banco A. Edwards. Sin embargo y de acuerdo a los antecedentes que poseía al momento de hacer la denuncia, el señor Vásquez Medina entregó la máquina que estaba bajo su custodia, a la sociedad Suministros Industriales Pucón Ltda., contraviniendo lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 18 de la Ley N° 18.112.

Expresa que los hechos descritos, configuraban los presupuestos del delito establecido en el N° 2 del artículo 19 de la Ley de Prenda sin Desplazamiento. En consecuencia, como el señor Vásquez en su calidad de síndico interventor y liquidador del convenio judicial preventivo de Protenns S.A., tenía a su cargo la totalidad de los bienes de esta sociedad, incluyendo la máquina prendada a favor del Banco A. Edwards, correspondía a su parte, como organismo público y fiscalizador efectuar la denuncia respectiva.

Indica, que posteriormente, debidamente facultado de acuerdo a la legislación vigente de aquella época, con fecha 16 de agosto de 2005, interpuso querella criminal en causa Rol 90.071-3, ante 2° Juzgado de Crimen



de San Miguel, por los mismos hechos denunciados anteriormente, para hacerse parte en la referida causa y solicitar diligencias, como asimismo, el conocimiento del sumario.

El tribunal que conocía de dicha querella, el día 05 de octubre de 2005 dictó auto de procesamiento en contra del señor Vásquez Medina, como autor del delito de infracción a la Ley de Prenda Sin Desplazamiento, previsto y sancionado en los artículos 18 y 19 de la Ley 18.112, actualmente derogada, proveyendo en lo pertinente: “se encuentra justificado en autos, en esta etapa de investigación, que un sujeto nombrado síndico interventor y liquidador del convenio judicial preventivo de la empresa Protenns S.A., sociedad con domicilio en Avenida Vicuña Mackenna N° 3757, de la comuna de San Joaquín, en dicha calidad procedió a entregar una máquina marca Niágara, modelo Súper Miura, C, Serie N° 1255-93, año 1986, reacondicionada, a un tercero que en definitiva la ocultó y respecto de la cual se había constituido prenda sin desplazamiento a favor del Banco A. Edwards, a la sociedad de Suministros Industriales Pucón S.A., sin consentimiento expreso del acreedor prendario; hecho que a juicio del Tribunal constituye el delito de infracción a la Ley de Prenda sin Desplazamiento, previsto y sancionado en los artículos 18 y 19 de la Ley 18.112”. Indica que en la misma resolución, se despachó orden de aprehensión bajo apercibimiento de rebeldía en contra del procesado.

Manifiesta que en razón de la medida decretada por el 2° Juzgado del Crimen de San Miguel, el demandante solicitó la libertad provisional bajo fianza, la cual fue negada el 13 de marzo de 2006, por estimarse que la privación de la libertad era necesaria para el éxito de la investigación del sumario. Al respecto, el señor Vásquez interpuso recurso de apelación en contra de esta resolución, la cual fue revocada el día 15 de marzo, por la ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel. Hace presente, que de acuerdo a certificación efectuada por la secretaria del 2° Juzgado del Crimen de San Miguel, dicho tribunal negó en nueve oportunidades la excarcelación solicitada por el demandante.

Expresa que el auto de procesamiento dictado con fecha 05 de octubre de 2005, fue dejado sin efecto por la ilustrísima Corte de Apelaciones de San



Miguel, el día 12 de agosto de 2008, aduciendo que existían nuevos antecedentes que se estimaban como suficientes para hacer variar las circunstancias que se tuvieron a la vista al momento de dictarse el referido auto de reo.

Expone que, finalmente, en la mencionada causa se dictó sobreseimiento temporal con fecha 23 de diciembre de 2010, en virtud del artículo 409 N° 1 del Código de Procedimiento Penal. Esta resolución fue apelada por el señor Vásquez ante la ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, la que falló el referido recurso con fecha 06 de abril de 2011, confirmando la resolución recurrida.

Afirma que aclarado lo anterior, resulta evidente que tanto la denuncia como la querella presentadas se encontraban ajustadas a los hechos que se ventilaron en aquellos años y del resto de los antecedentes de contexto que relató precedentemente, lo que en definitiva descarta cualquier tipo de arbitrariedad de su parte, tanto al denunciar al demandante de autos como al interponer la querella en su contra, por encontrarse dichas actuaciones ajustadas a las atribuciones y obligaciones legales que posee el mencionado órgano en esta materia.

Por otra parte, destaca que el actor cae en abiertas contradicciones al momento de relatar los hechos en que funda su demanda, en relación con aquellos que ha señalado en los otros juicios que se ventilan ante este mismo tribunal, por cuanto no coinciden las fechas en que se habrían publicado las noticias relativas a su persona, y aquellas en que se denunció al actor e interpuso la querella; y además, se trata de noticias relativas a hechos completamente diferentes a los que son objeto de este juicio, ya que el hecho generador del daño que alega el actor, esto es, la denuncia y posterior interposición de una querella criminal y su difusión a través de los medios de comunicación, no ha existido como tal, por cuanto dicha noticia no fue cubierta por ningún medio de prensa, siendo imposible entonces atribuir responsabilidad a su parte a este respecto.

2. Consideraciones relativas al derecho y al régimen de responsabilidad invocado por el actor.



Manifiesta que el derecho en que se apoya la demanda resulta ser insatisfactorio. En efecto, en el capítulo correspondiente a dicha materia, se limita a enumerar y citar una serie de artículos de la Constitución Política de la República, Tratados Internacionales y la Ley N° 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, así como la enumeración de la supuesta violación de derechos fundamentales del actor; pero en ningún caso desarrolla la forma en que dichos derechos o garantías habrían sido vulneradas, ni tampoco fundamenta el régimen de responsabilidad en que sustenta su acción.

En consecuencia, dada la confusión anterior y atendidas las imputaciones vertidas en el libelo, indica, que no cabe sino entender que se ha demandado a su parte por la responsabilidad que le cabría en el presunto error judicial en la investigación criminal seguida en contra del actor, la que finalmente fue sobreseída temporalmente; así como la responsabilidad extracontractual del mismo órgano, por la supuesta renuncia forzosa del demandante a su cargo de síndico, la denuncia e interposición de una querella criminal, sin supuestamente contar con las facultades legales para ello, y los supuestos actos difamatorios en que habría incurrido.

III. Improcedencia de la acción por falta del requisito previo de declaración de error judicial.

Sostiene que la demanda deberá ser rechazada además, por cuanto no cumple con uno de sus requisitos de admisibilidad: la declaración previa de error judicial.

Plantea que más allá de los antecedentes de derecho expuestos por el actor, lo cierto es que en la especie se está ante una demanda que tiene por objeto que se le indemnice el daño que habrá sufrido el actor producto del supuesto error judicial ya reseñado, esto es, que se dictara auto de procesamiento en su contra y que fuese detenido, extendiéndose dicha medida por el término de cinco meses y tres días.

En efecto, aun cuando el demandante esgrima que lo anterior habría sido culpa de su parte o del codemandado Sr. Lira Silva, lo cierto es que quien dictó el auto de procesamiento y decidió mantener en prisión al Sr. Vásquez, fue el juez del 2° Juzgado del Crimen de San Miguel, de forma tal que se está



en presencia de un claro caso en que se demanda la indemnización de perjuicios correspondiente al error judicial.

En otras palabras, continúa, los hechos relatados en la demanda corresponden a la acción constitucional de indemnización de perjuicios por error judicial establecida en el artículo 19 N°7 letra i) de la Constitución Política de la República, toda vez que la circunstancia determinante del daño cuya reparación pretende, es haber sido injustamente imputado en el juicio criminal.

Sostiene que la acción constitucional de indemnización por error judicial se encuentra regulada en la Constitución, la cual establece como requisito previo a la discusión de la naturaleza y monto de los perjuicios, la existencia de una declaración previa de la Corte Suprema que determine que fue “injustificadamente errónea o arbitraria” la resolución judicial de que se trate, y mientras tal declaración no exista, la acción incoada no puede ni debe prosperar.

Así las cosas, bajo la apariencia de una acción indemnizatoria común, el demandante ha deducido veladamente una acción de carácter constitucional, cuyos requisitos de admisibilidad están establecidos en la propia Carta Fundamental los que no se cumplen en la especie.

IV. Improcedencia de la acción por falta de declaración previa de denuncia o querella calumniosa.

Expone que la demanda de autos tampoco podrá prosperar en cuanto a la interposición de la denuncia y querella criminal por su parte, en atención a que no se ha cumplido con un requisito previo que establece la ley: la declaración de denuncia o querella calumniosa.

Explica que en el ordenamiento jurídico chileno, el denunciante o querellante no contrae otra responsabilidad que la que corresponde a los delitos que hubiere cometido por medio de la denuncia o querella, lo que exige una declaración judicial previa por el juez competente en lo criminal, de que éstas han resultado calumniosas.



En efecto, si el actor estima que la sola interposición de la denuncia o querrella importó infringirle un daño, se trataría de un hipotético abuso de la acción en el campo penal. Siendo así, este abuso se puede producir solo en dos situaciones que no se dan en la especie: la comisión de un delito de denuncia o querrella calumniosa y la comisión de un delito de calumnias o injurias vertidas en juicio.

Por lo anterior, continúa, resulta evidente que el demandante ha omitido un requisito previo establecido por la legislación penal, a fin de que pueda solicitar cualquier tipo de indemnización por la interposición de la querrella o la denuncia que se esgrime en autos. Sostener lo contrario, importa arribar a la negación misma del derecho a interponer acciones judiciales.

Señala que la denuncia o querrella calumniosa se encuentra establecida en el artículo 211 del Código Penal, y para reclamar de supuestos daños causados por su interposición, el demandante tendría que esperar la dictación de la pertinente sentencia absolutoria (que aún no se dicta) para luego requerir ante el tribunal del crimen competente la declaración de ser calumniosa la denuncia o acción deducida, para lo cual se debe acreditar no solo la falsedad de la imputación sino la conciencia de dicha falsedad, que resultaría imposible, a la luz de los hechos en que se fundó tanto la denuncia como la querrella objetada en autos; hechos que por lo demás tuvo en cuenta el Juzgado del Crimen de San Miguel para solo sobreseer temporalmente el procedimiento.

V. Inimputabilidad del Estado por los eventuales perjuicios que puedan derivarse de las decisiones de un tribunal.

Sostiene que la demanda de autos no podrá prosperar por resultar inimputable a su parte los supuestos perjuicios que hayan podido generarse respecto de las decisiones del 2° Juzgado del Crimen de San Miguel.

Indica que el marco normativo en que se situaba la atribución que la Ley 18.175, en su antigua redacción, confería a la Fiscalía Nacional de Quiebras (elevada a la categoría de Superintendencia de Quiebras en virtud de la Ley 9.806) en su artículo 8 N° 8 de ejercer la acción penal, al disponer que esta tenía la atribución de “Interponer la acción penal encaminada a hacer



efectiva la responsabilidad del síndico y de cualquier otra persona que hubiere tenido injerencia en la administración de la quiebra”, por la grave repercusión social que ellos envuelven.

En consecuencia, cuando se resuelve denunciar al actor o deducir la acción penal, no se hizo otra cosa sino que cumplir a cabalidad los deberes que en tal sentido le imponía la ley.

De esta manera, cualquier eventual daño ocasionado al demandante con ocasión de la denuncia o interposición de la querella ventilada en autos, no es imputable a su parte como erradamente sostiene el Sr. Vásquez.

VI. Inexistencia de responsabilidad extracontractual del Estado por actuaciones de los jueces en el ejercicio de sus funciones.

Precisa que habida la excepción de la responsabilidad del Estado por los procesamientos y condenas injustificadamente erróneos o arbitrarios, a los que la Constitución Política de la Republica les asigna un procedimiento especial en su artículo 19 N° 7 letra i), el ordenamiento jurídico nacional, partiendo por la Carta Fundamental, no contempla la responsabilidad del Estado por los actos y decisiones del Poder Judicial -poder independiente que no forma parte de la Administración del Estado- sino que, solamente, la responsabilidad personal de los jueces por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, denegación y torcida administración de justicia y, en general, de toda prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones. (Artículo 76 de la Constitución Política de la Republica). Dicha responsabilidad se encuentra regulada por los artículos 324 a 331 del Código Orgánico de Tribunales.

No se aplican, por consiguiente, a las decisiones y actuaciones de los jueces ni del Poder Judicial, con la excepción anotada de los procesamientos y condenas injustificadamente erróneos o arbitrarios, las normas sobre responsabilidad extracontractual del Estado contenidas en la Carta Fundamental, en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni menos las del Código Civil, como pretende el demandante.



VII. Inconcurrencia de los requisitos para configurar la responsabilidad extracontractual del Fisco.

Plantea que en la especie no concurre ninguno de los requisitos de la responsabilidad extracontractual que se han imputado de contrario.

A) Ausencia de un hecho imputable a dolo o culpa:

Sostiene que la denuncia y posterior interposición de la querella criminal de marras, fueron interpuestas por parte del ex Superintendente de Quiebras, haciendo uso de las facultades legales que ostentaba al momento de la ocurrencia de los hechos, esto es, ejerciendo las atribuciones que la Ley 18.175, en su antigua redacción, confería a la Fiscalía Nacional de Quiebras, por lo que descarta que se haya incurrido en un hecho imputable a dolo o culpa en lo que respecta a esta materia.

Lo mismo ocurre con la orden de detención dictada por el 2° Juzgado del Crimen de Santiago, ya que se trata de un hecho dispuesto por un tribunal de justicia del todo ajeno a su parte e incluso del Fisco de Chile.

En cuanto a que el actor habría sido forzado u obligado a renunciar a su cargo de síndico de quiebras producto de la “cruenta persecución” sufrida, esto es, por la interposición de la querella en comento y de otras quince que se habrían deducido en su contra, expone que es el propio demandante quien confesó que presentó su renuncia en forma voluntaria al cargo de síndico, de manera que no divisa de qué manera podrá probar el actor el vicio de la voluntad a que se refiere en su demanda.

Por último, en cuanto al supuesto escarnio público, reitera que las publicaciones de prensa a que se refiere el demandante en su demanda, son en su mayoría anteriores a los hechos en que se sustenta la presente acción que nada dicen relación con ellos.

B) Ausencia de nexo causal:

En cuanto al lucro cesante, refiere que es evidente que en la especie no existe relación causal entre los supuestos daños y los hechos que los habrían generado, por cuanto no puede racionalmente considerarse que las sumas que



dejó de percibir el actor sean consecuencia cierta, directa y necesaria de la o las querellas criminales deducidas en su contra o de la resolución dictada por el 2° Juzgado del Crimen de Santiago.

Respecto al daño moral, el hecho que lo habría generado dice relación con el sufrimiento padecido producto de la denuncia e interposición de la querella criminal, la difusión de ésta a través de la prensa, y por el hecho de haber sido privado de libertad por este motivo. Sin embargo, la denuncia y la interposición de la querella no causó el efecto mediático que esgrime el actor en autos, por cuanto lo que en realidad se ventiló públicamente fueron las constantes investigaciones de que fue objeto, los numerosos juicios que tuvo que enfrentar y las sentencias que lo removieron de las quiebras que administraba, de forma tal que no existe relación causal entre uno y otro hecho.

Por su parte, la sola interposición de la denuncia y querella de marras tampoco puede considerarse como suficiente nexo causal de los perjuicios alegados, por cuanto es menester para ello obtener una declaración judicial que determine que la querella tuvo el carácter de calumniosa, en forma previa a solicitar la indemnización de perjuicios, además de constituir dichos actos el ejercicio de una potestad y el cumplimiento de un deber legal por parte del ex Superintendente de Quiebras.

Por último, y en relación a la privación de libertad, recuerda que dicha decisión no la tomó el exsuperintendente, sino que el tribunal del crimen de San Miguel, por lo que si el Sr. Vásquez estima que dicha decisión no se ajustó a derecho o fue manifiestamente arbitraria, debe iniciar las acciones que el artículo 19 N°7 letra i) de la Constitución Política de la República contempla para ese tipo de casos, además de resultar del todo improcedente pretender configurar la responsabilidad del estado respecto de actos de carácter jurisdiccional del Poder Judicial.

VIII. En cuanto a las indemnizaciones reclamadas.

1. En relación al lucro cesante.



Señala que en este punto el actor sostiene que si no hubiese voluntariamente renunciado a su cargo de síndico, podría haber continuado recibiendo las sumas que antes de ello percibía, las que multiplica arbitrariamente por la cantidad de años que, en su concepto, podría haber trabajado en el mencionado cargo.

Al respecto, afirma que así planteado, el lucro cesante corresponde a la definición misma de incerteza; sin perjuicio de recordar que el peso de la prueba recae sobre el demandante, porque el daño, como los demás hechos que determinan el nacimiento de la obligación indemnizatoria, deben ser probados por quien la alega. Y en este caso puntual, si se pretende invocar presunciones, el actor debe probar los hechos que permitan al juez construirlas.

2. En cuanto al daño moral.

Manifiesta que la pena y la aflicción, como el mero dolor no dan lugar al daño moral. Para que sea resarcible este concepto, es menester que la pérdida material sufrida se traduzca en un real menoscabo de los atributos de la personalidad, debidamente exteriorizado.

Así, el tribunal debe establecer la existencia de ese daño, su real entidad y los factores que tendrá en consideración para su fijación. En esta regulación debe hacer primar la idea de justicia y de equidad, limitada por los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

Indica que la aflicción y el dolor, debidamente exteriorizados, deben compensarse con una suma razonable y prudente para lograr la finalidad de la indemnización, que no es la sanción ni el lucro, sino puramente satisfactiva.

Concluye que así las cosas, los conceptos en que el demandante funda su pretensión indemnizatoria, hacen que sea injustificado su pago, y por lo tanto, debe ser rechazada.

3. En cuanto al reajustes y la improcedencia de demandar el pago de una indemnización en unidades de fomento.



Expresa que solo puede aplicarse reajustabilidad desde la fecha en que la indemnización haya quedado establecida por sentencia firme, pues con anterioridad a tal evento, no existe jurídicamente suma alguna susceptible de ser reajustada.

Asimismo, manifiesta que resulta improcedente demandar una indemnización de perjuicios expresada en unidades de fomento, puesto que como es sabido, la UF es una unidad de cuenta que se encuentra indexada a la variación del IPC, o dicho de otra forma, lleva incorporada el reajuste por la variación del índice de precios al consumidor.

Por consiguiente, para el evento que el fallo acoja la demanda total o parcialmente, no se podrá expresar dicha condena en unidades de fomento, y en el caso de que la condena sea en pesos, se deberá establecer la reajustabilidad a partir de la fecha en que el fallo quede firme, y no como se pretende de contrario, desde que se dicte la sentencia.

4. En cuanto a los intereses.

Sostiene que toda indemnización de perjuicios tiene por finalidad la reparación del daño causado, en términos de colocar a la víctima en la situación anterior al acaecimiento del hecho lesivo. Por consiguiente, el pago de una indemnización no puede en caso alguno constituir una fuente de lucro o ganancia. En otros términos, el monto de la indemnización no debe exceder la cuantía del daño sufrido.

CUARTO: Que, a fojas 128, el demandante evacuó la réplica en relación a la contestación del demandado Diego Lira Silva.

Luego de precisar los errores y omisión de antecedentes en que incurriría la contestación del demandado Sr. Lira, desarrolla su escrito siguiendo los puntos contenidos en la contestación, a saber:

I. Facultades y obligaciones de la Superintendencia de Quiebras. Contexto en que se produjeron los hechos en que se basa la demanda.

1. Atribuciones y obligaciones del demandado Sr. Lira, quien a la fecha detentaba el cargo de superintendente de quiebras:



Indica que el demandado Sr. Lira, señala que con ocasión de distintas fiscalizaciones habría tomado conocimiento de una serie de irregularidades y presuntos ilícitos en que habría incurrido en el ejercicio de sus funciones, en dicho contexto, y en el cumplimiento del mandato que por ley se le asigna a la Superintendencia de Quiebras, es que se dedujeron distintas acciones en su contra.

Sin embargo, en este punto el Sr. Lira no señala el fundamento fáctico y legal que habría motivado el supuesto cumplimiento de su mandato, que le habría permitido interponer querellas carentes de toda plausibilidad, evita ir al fondo, omitiendo el hecho que la realidad fáctica y legal es que carecía de toda atribución legal, puesto que a esa fecha ya había sido derogado el artículo 8° de la Ley de Quiebras, mediante la Ley 19.806, en el año 2002. Expone que evita hacer toda mención a ello, porque jamás debió haber llevado adelante una querella como lo hizo, no era parte agraviada y carecía de toda legitimación activa para actuar. Sus actuaciones estuvieron al margen de lo legal, y solo fueron motivadas por intereses espurios y alejado totalmente de un supuesto celo profesional, ya que solo se dirigió en contra de su parte; no hubo ningún otro síndico al cual se le dirigieran en cantidad tales acciones.

Refiere que su accionar, además, estuvo totalmente alejado de las normas reglamentarias que rigen el actuar de los funcionarios públicos a través de la Ley Orgánica de Bases de la Administración del Estado, que establece en sus artículos 2° y 3°, el marco normativo de la Administración del Estado.

Sostiene que el Sr. Lira al querellarse en su contra, sin tener legitimación activa, sin ser parte agraviada y sin estar dotado de facultades legales, actuó al margen de la legalidad y del marco constitucional y orgánico, con dolo, generando con ello un daño en su persona, sin siquiera obtener un resultado favorable, por el contrario, interpuso un número considerable de querellas y denuncias todas sin fundamento plausible y sin conseguir condena alguna.

Plantea que es aquí donde se encuentra el fundamento y sustrato de su demanda, ya que se actuó por parte del demandado por simple capricho e



animadversión provocando que se viera obligado a renunciar por dichas actuaciones ilegales, ilegítimas, alejadas de los principios normativos que rigen el actuar de los funcionarios públicos. Su renuncia no fue un acto voluntario, estuvo movido por el accionar ilegal del Sr. Lira, quien lo persiguió de manera cruel y en forma incruenta. Su renuncia estuvo motivada en concentrarse en su defensa, la que se inició el año 2002 y se mantuvo y duró hasta el mes de abril del año 2014, cuando se puso término a la última querrella en tramitación.

II. Excepción de prescripción.

Expone que esta materia fue objeto de controversia en los mismos términos planteados ante este Tribunal, por parte de la Superintendencia de Quiebras, en la en causa Rol C-13.125-2012, en la cual mediante sentencia de fecha 05 de junio del año 2015, el tribunal zanjó y resolvió favorablemente sus argumentos en cuanto a la forma de contabilizar la prescripción, que es aquella que estatuye el artículo 2514 del Código Civil y que establece que el plazo se cuenta desde que la obligación se hace exigible, en la especie, desde que se dicta resolución de sobreseimiento sea temporal o bien definitivo en la causa criminal y ésta queda firme y causa ejecutoria. Así, la señalada sentencia desechó los argumentos de la contraria y siendo apelada por la Superintendencia de Quiebras, fue confirmada por la unanimidad de la Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en causa Rol C-10355-2015.

III. No resulta jurídicamente posible que una persona natural sea solidariamente responsable con el Estado.

Afirma que esta materia fue objeto de controversia en los mismos términos planteados ante este Tribunal, por parte del demandado Sr. Héctor Patricio Navarrete Arias en la en causa Rol C -13.125-2012, en la cual, mediante sentencia de fecha 05 de junio del año 2015, el tribunal zanjó y resolvió favorablemente sus argumentos en cuanto a que la solidaridad es eminentemente legal y es aquella que estatuye el artículo 2317 del Código Civil. Indica que la señalada sentencia desechó los argumentos de la contraria, no fue apelada por ninguna de las partes, y fue confirmada por la unanimidad



de la Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en causa Rol C-10355-2015.

IV. La falta de servicio de los órganos públicos.

Manifiesta que el demandado pretende hacer creer que actuó movido por loables motivos, tales como el de proteger el bien público comprometido en todo juicio de quiebras, velar por la fe pública, actuar en representación de los acreedores evitando el daño patrimonial de la masa, ya que en la protección del orden público económico habría ejercido las facultades legales que la ley le encomienda, evitando además una eventual negligencia u omisión de parte de la Superintendencia de Quiebras.

Sin embargo, todos los conceptos, elementos y motivos que invoca el demandado para haber actuado como lo hizo, chocan y se estrellan con los principios del Estado de Derecho, que se traducen en los artículos 5°, 6° y 7° de la Constitución Política de la República de Chile y en el artículo 2° de la Ley General de Bases de la Administración del Estado, que ponen un freno y un cortapisas a esta supuestas actuaciones loables, pero carentes de sustento legal, toda vez que dichas normas tratan de evitar que gente como el Sr. Lira hagan uso y abuso de su cargo.

Destaca que “tan supuesta loable” actuación del demandado Sr. Lira ni siquiera contó con la aprobación y apoyo del dueño de la máquina, esto es, el Banco A. Edwards, único legitimado activo, que ni siquiera denunció, ni menos se querelló en su contra, lo que precariza aún más la actuación ilegal e ilegítima del demandado.

V. Los supuestos de la responsabilidad civil extracontractual.

Transcribe doctrina sobre la materia de doña Clara Szczaransky Cerda, señalando que en el caso sublite, el demandado no señala el fundamento legal que habría motivado el cumplimiento de su supuesto mandato de interponer querellas carentes de toda plausibilidad en su contra, evita ir al fondo, ya que la realidad fáctica y legal es que carecía de toda atribución legal, puesto que a esa fecha ya había sido derogado el artículo 8° de la Ley de Quiebras. Evita hacer mención a que bastaba que hubiera efectuado una denuncia en su contra



ante la jurisdicción (que ya la había hecho) y además haber puesto en conocimiento del acreedor prendario de la máquina los hechos denunciados, jamás haber llevado adelante acciones y peticiones dentro del proceso, ni tampoco haberse querellado como lo hizo, luego es evidente que se cumplen con los requisitos para configurar la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que los argumentos de la contraria en el sentido contrario, deben ser desechados, por carecer de toda plausibilidad legal y fáctica.

QUINTO: Que, a fojas 149, la demandante evacuó la réplica en relación a la contestación de la demandada Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.

Luego de precisar los errores y omisión de antecedentes en que incurriría la contestación de la demanda, desarrolla su escrito siguiendo los puntos contenidos en la contestación, a saber:

I. Excepción de prescripción:

Expone que esta materia fue objeto de controversia en los mismos términos planteados ante este Tribunal, por parte de la Superintendencia de Quiebras, en la en causa Rol C-13.125-2012, en la cual, mediante sentencia de fecha 05 de junio del año 2015 el tribunal zanjó y resolvió favorablemente sus argumentos, en cuanto a la forma de contabilizar la prescripción, que es aquella que estatuye el artículo 2514 del Código Civil y que establece que el plazo se cuenta desde que la obligación se hace exigible, en la especie, desde que se dicta resolución de sobreseimiento, sea temporal o bien definitivo en la causa criminal y ésta queda a firme y causa ejecutoria. Así, la señalada sentencia desechó los argumentos de la contraria, y siendo apelada por la Superintendencia de Quiebras, fue confirmada por la unanimidad de la Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en causa Rol C-10355-2015.

II. Improcedencia de la acción por falta del requisito previo de declaración de error judicial.

Manifiesta que igualmente esta materia fue objeto de controversia en los mismos términos planteados ante este Tribunal por la Superintendencia de Quiebras, en la en causa Rol C-13.125-2012, en la cual, mediante sentencia de



fecha 05 de junio del año 2015, se zanjó y se resolvieron favorablemente sus argumentos en el sentido que aquí no hubo error judicial, puesto que hubo una denuncia y posterior querella interpuesta por un órgano de la administración del Estado, fuera de su competencia y de manera ilegal e ilegítima, y la jurisdicción cumpliendo con su mandato legal se avocó a la investigación de los supuestos ilícitos, y con todos los antecedentes necesarios entregados y producidos por su parte, dejó sin efecto el auto de procesamiento, no obstante la oposición de la parte querellante y dictó sobreseimiento temporal, sin perjuicio la oposición de la contraria, por no haberse acreditado el supuesto ilícito. Indica que la sentencia de este tribunal desechó los argumentos de la contraria, la que fue apelada por la parte de la Superintendencia de Quiebras, siendo confirmada por la unanimidad de la Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en causa Rol C-10355-2015.

III. Improcedencia de la acción por falta de declaración previa o querella calumniosa.

Sostiene que esta materia fue objeto de controversia en los mismos términos planteados en este Tribunal por la Superintendencia de Quiebras, en la en causa Rol C-13.125-2012, y que mediante sentencia de fecha 05 de junio del año 2015 el tribunal zanjó y resolvió favorablemente sus argumentos en el sentido que no es necesario haber accionado en sede criminal para demandar en sede civil, no se trata de un requisito previo, ambas acciones transitan por cuerda separada, desechando los argumentos de la contraria; dicha sentencia fue apelada por la parte de la Superintendencia de Quiebras, la que fue confirmada por la unanimidad de la Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en causa Rol C-10355-2015.

IV. Inimputabilidad del Estado por los eventuales perjuicios que puedan derivarse de las decisiones de un tribunal.

Afirma que en este punto está de acuerdo con la contraria, pues no se trata en la especie que un tribunal del crimen se haya avocado a investigar por decisión propia, sino que la Superintendencia de Quiebras, a través del Sr. Lira, recurre a dicho tribunal de la República, es decir, un órgano administrativo del Estado requiere su intervención, ello concuerda con lo



estatuido en el artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales que establece que un tribunal cuando se reclama su intervención, no puede excusarse de ejercer su autoridad, luego es evidente que tal hipótesis aquí planteada en forma peregrina no puede prosperar y debe ser rechazada.

V. Inexistencia de responsabilidad extracontractual del estado por actuaciones de los jueces en el ejercicio de sus funciones.

Señala estar de acuerdo con el planteamiento de la contraria, no se trata en la especie que un tribunal del crimen se haya avocado a investigar por decisión propia, sino que la Superintendencia de Quiebras, a través del Sr. Lira, recurre a dicho tribunal de la República, es decir, un órgano administrativo del Estado requiere su intervención, ello concuerda con lo estatuido en el artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales que establece que un tribunal cuando se reclama su intervención, no puede excusarse de ejercer su autoridad y en el caso de autos el Segundo Juzgado del Crimen de San Miguel con los antecedentes aportados por el denunciante y luego querellante, resolvió con el mérito de los mismos, por lo que sus actuaciones se atuvieron a los antecedentes que constaban en el proceso. Es así, que no hubo de parte de la jurisdicción criminal un uso abusivo de sus funciones, tal hipótesis aquí planteada en forma peregrina no puede prosperar y debe ser rechazada por total falta de fundamentos.

VI. Inconcurrencia de los requisitos para configurar la responsabilidad extracontractual del fisco.

Al respecto, transcribe doctrina sobre la materia de doña Clara Szczaransky Cerda, señalando que en el caso sublite, el demandado no señala el fundamento legal que habría motivado el cumplimiento de su supuesto mandato de interponer querellas carentes de toda plausibilidad en su contra, evita ir al fondo, ya que la realidad fáctica y legal es que carecía de toda atribución legal, puesto que a esa fecha ya había sido derogado el artículo 8° de la Ley de Quiebras. Indica que evita hacer mención a que bastaba que hubiera efectuado una denuncia en su contra ante la jurisdicción (que ya la había hecho) y además haber puesto en conocimiento del acreedor prendario



de la máquina los hechos denunciados, sin jamás haber llevado adelante acciones y peticiones dentro del proceso ni haberse querellado como lo hizo.

Plantea que en este sentido, según la doctrina de la Sra. Clara Szczaransky Cerda, estaría bastante claro que la Superintendencia actuó fuera de la finalidad de la función, con intención de agraviar, por lo que, indica, es evidente que se cumplen con los requisitos para configurar la responsabilidad extracontractual del Estado.

VII. En cuanto a las indemnizaciones reclamadas.

1. En cuanto al daño moral y lucro cesante:

Asevera que resulta evidente que se vio obligado a renunciar, ya que no obstante ser la causal del N° 9 del artículo 22 del Código de Comercio, la renuncia voluntaria, obviamente su decisión estuvo influida por la gran cantidad de procesos criminales en su contra, dado que todo su tiempo estuvo dedicado a su defensa, a demostrar su inocencia. El estado de derecho contempla el que la jurisdicción pueda presumir, toda vez que el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil contempla las presunciones como medio de prueba de que se pueden valer en juicio las partes.

Plantea que es así que se puede presumir el daño moral, cuando alguien ha sufrido y ha sido dañado al estar detenido injustamente más de cinco meses, nadie en su sano juicio podría decir lo contrario, el estar privado del contacto con su familia compuesta por tres hijos, todos menores de edad a la fecha de ocurrencia de los hechos, a quienes no se les dijo donde estaba su padre, para protegerlos, quienes a esa edad presumieron lo peor, que su padre los había abandonado.

Hace presente que cuando postuló para ser síndico, siempre lo vio como un proyecto de vida, una actividad en la que puso todo su empeño y esfuerzo, el que siendo recompensado económicamente, nunca pensó en renunciar, pero se vio obligado por las circunstancias para dedicar todo su tiempo a su defensa. Así, siempre estuvo a disposición de la jurisdicción, la que resolvió en su favor, no obstante las desfavorables pretensiones de la contraria que buscaban dañarlo.



Expresa que el monto que demanda está basada en cifras reales e históricas, tanto es así que éstas no fueron objetadas por ninguna de las demandadas, solo hay presunción al estimar los años que pudo dedicar a dicha actividad sino hubiera habido intervención de terceros, que es la legal de 65 años, no obstante que hubo síndicos que murieron a edades avanzadas en el desempeño de la actividad, que excedieron la edad legal de jubilación.

SEXTO: Que, a fojas 163, evacuó la réplica el demandado Diego Lira Silva.

1. Consideraciones generales en relación a la réplica:

Señala que mediante presentación de fecha 01 de marzo de 2016, la demandante evacuó el traslado conferido a la réplica haciendo hincapié en que sus actuaciones serían constitutivos de responsabilidad extracontractual.

Sostiene que no se entrega argumento jurídico alguno que sustente su precaria demanda, dejando en claro que está condenada al fracaso por manifiesta falta de fundamento.

Reitera que fueron los tribunales de justicia quienes conocieron de las irregularidades cometidas por el Sr. Vásquez en su proceder como síndico, y quienes tomaron las decisiones correspondientes, no teniendo su parte injerencia en las decisiones adoptadas.

Asimismo, señala que la aplicación del derecho asociado a su presentación no explica como una persona natural puede ser objeto del mismo tratamiento jurídico y ser solidariamente responsable con el Estado por actuaciones realizadas durante el ejercicio de una función pública.

En consecuencia, malamente podría existir responsabilidad civil extracontractual si las normas que la fundamentan no pueden ser aplicadas al caso de autos.

2. No se puede discutir en un proceso de indemnización de perjuicios como el de autos, las facultades y obligaciones de la Superintendencia de Quiebras:



Manifiesta que en el evento que la Superintendencia de Quiebras excediera sus funciones, dicha circunstancia debió hacerse valer precisamente en los actos que se materializaba el exceso imputado.

Concretamente, la circunstancia de no detentar su parte la acción penal, debió discutirse, precisamente, en aquella causa en que se hizo efectiva dicha acción.

Asevera que si la querella fue aceptada a tramitación, es porque la Superintendencia detentaba la referida facultad de accionar penalmente, por lo que pretender discutir en un juicio civil tal circunstancia, es manifiestamente improcedente ya que no se puede impugnar ahora una situación jurídica que se toleró en el pasado.

SÉPTIMO: Que, a fojas 167, evacuó la dúplica la demandada Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.

I. Excepción de prescripción.

Manifiesta que opuso a la demanda de autos excepción de prescripción del artículo 2332 del Código Civil y, en subsidio, aquella contemplada en los artículos 2514 y 2515, del mismo Código.

Al respecto, el actor señaló que dicha excepción debía rechazarse debido a que el plazo de prescripción debe contarse desde la ejecutoria de la resolución de sobreseimiento, sea temporal o definitiva.

Sobre el particular, afirma que así planteados los argumentos, la réplica del actor modifica los hechos que expuso en su acción, por cuanto en ésta circunscribe el hecho generador del daño de marras a la sola interposición de una denuncia y querella criminal, en circunstancias que del tenor del escrito de demanda, el hecho dañoso se compone no solo de aquel ítem, sino que de los siguientes hechos supuestamente dañosos:

- Porque el 2º Juzgado del Crimen ordenó su detención, la que se mantuvo por el término de 5 meses y 3 días.

- Debido a la interposición de una querella criminal de su parte, sin supuestamente contar con facultades para ello.



- En atención a que se vio obligado a renunciar a su cargo de síndico, debido a la situación judicial que debió enfrentar.

- El escarnio público que todo lo anterior habría significado.

Por consiguiente, no resulta ajustado a los hechos ventilados en el juicio ni al derecho aplicable, la alegación del actor relativa a que el plazo de prescripción deba contarse desde el sobreseimiento, ya que el daño que alega haber sufrido no se produjo en dicha oportunidad, sino que por su detención, por haber sido “obligado” a renunciar, y por la exposición pública de su caso.

La perpetración del acto, por consiguiente, se produjo en dichas ocasiones, y no con el sobreseimiento, como se esgrime de contrario.

Así las cosas, considerando que el hecho generador del daño no principió en la época de los sobreseimientos que indica el actor, no puede sino concluirse que la acción de autos se encuentra prescrita.

II. Improcedencia de la acción por falta de requisito previa declaración de error judicial.

Señala que aun cuando el demandante esgrima que la detención habría sido culpa de su parte o del codemandado Sr. Lira Silva, lo cierto es que quien dictó el auto de procesamiento y decidió mantener en prisión al Sr. Vásquez, fue el juez del 2º Juzgado del Crimen de San Miguel, de forma tal que se está en presencia de un claro caso en que se demanda la indemnización de perjuicios correspondiente al error judicial.

Sostiene que para hacerse cargo de dicha defensa, el actor ha señalado que el mismo argumento habría sido ventilado en la causa Rol C-13.125-2012 seguida ante este mismo Tribunal, y que habría sido rechazado. Sin embargo, junto con recordar que dicha sentencia rechazó en todas sus partes la demanda deducida, hace presente que en el escrito de contestación no se esgrimió la falta de declaración de error judicial, sino que de declaración de querella calumniosa, de manera tal que no existe pronunciamiento alguno al respecto.

III. Improcedencia de la acción por falta de declaración previa de denuncia o querella calumniosa.



Afirma que la presente acción, no podrá prosperar en cuanto a la interposición de la denuncia y querella criminal por su parte, en atención a que no se ha cumplido con un requisito previo que establece la ley: la declaración de denuncia o querella calumniosa.

En relación a dicha defensa, la parte demandante nuevamente cita la sentencia que rechazó su demanda en los autos Rol C-13.125-2015 seguidos en este mismo Tribunal, para esgrimir que sería improcedente este argumento. Sin embargo, sin perjuicio de señalar que resulta a lo menos curioso que el actor cite una sentencia en la que su acción fue totalmente rechazada, destaca que las sentencias producen efectos relativos, de manera tal que nada obsta a que en este juicio pueda esgrimirse el mismo argumento, y que el Tribunal pueda acogerlo, atendido el mérito de autos y de las pruebas que se rindan.

IV. Inimputabilidad del Estado por los eventuales perjuicios que puedan derivarse de las decisiones de un Tribunal.

Manifiesta que el fundamento de su defensa, estriba en que cuando resolvió denunciar al actor o deducir la acción penal, no hizo otra cosa que cumplir a cabalidad los deberes que en tal sentido le imponía la ley, y que desde ese momento, la averiguación y comprobación del hecho punible y la determinación de los responsables, así como el procesamiento correspondiente y la adopción de las medidas investigativas y cautelares, quedaban entregadas por entero a la jurisdicción privativa del tribunal ante el que se había presentado la denuncia o querella, de conformidad con lo prescrito en el artículo 73 de la Constitución Política.

Concluye que así las cosas no son atribuibles al querellante los actos del tribunal, ni los perjuicios que eventualmente puedan derivarse de las decisiones adoptadas por el juez en el curso del proceso.

V. Inexistencia de responsabilidad extracontractual del Estado por actuaciones de los jueces en el ejercicio de sus funciones.

Refiere, que de conformidad con la legislación, y habida excepción de la responsabilidad del Estado por los procesamientos y condenas injustificadamente erróneos o arbitrarios, el ordenamiento jurídico no



contempla la responsabilidad del Estado por los actos y decisiones del Poder Judicial, sino que, solamente, la responsabilidad personal de los jueces, que se encuentra regulada por los artículos 324 a 331 del Código Orgánico de Tribunales.

No se aplican, por consiguiente, a las decisiones y actuaciones de los jueces ni del Poder Judicial, con la excepción anotada de los procesamientos y condenas injustificadamente erróneos o arbitrarios, las normas sobre responsabilidad extracontractual del Estado, contenidas en la Carta Fundamental, en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni menos las del Código Civil, como pretende el demandante.

VI. Inconcurrencia de los requisitos para configurar la responsabilidad extracontractual del Fisco.

A) Ausencia de un hecho imputable a dolo o culpa.

Asevera que la denuncia y posterior interposición de la querella criminal de marras, fueron interpuestas por parte del ex superintendente de quiebras, haciendo uso de las facultades legales que ostentaba al momento de la ocurrencia de los hechos. Lo mismo ocurre con la orden de detención dictada por el 2° Juzgado del Crimen de Santiago, ya que se trata de un hecho cometido por un tribunal de justicia del todo ajeno a su parte e incluso al Fisco de Chile.

En cuanto a que el actor habría sido forzado u obligado a renunciar a su cargo de síndico de quiebras, señala que es el propio demandante quien confesó que presentó su renuncia en forma voluntaria al cargo.

Sostiene que de esta manera, queda claro que no es posible configurar el primer elemento de la responsabilidad extracontractual, toda vez que no existe hecho imputable a dolo o culpa que pueda atribuírsele a su actuación.

B) Ausencia de nexo causal.

En cuanto al lucro cesante, expresa que es evidente que en la especie no existe relación causal entre los supuestos daños y los hechos que lo habrían



generado, por cuanto no puede racionalmente considerarse que las sumas que dejó de percibir el actor sean consecuencia cierta, directa y necesaria de la o las querellas criminales deducidas en su contra o de la resolución dictada por el 2° Juzgado del Crimen de Santiago, sino que la razón por la que el actor dejó de percibir ingresos como síndico se debe a que renunció en forma voluntaria a dicho cargo.

En cuanto al daño moral, precisa que el hecho que lo habría generado dice relación con el sufrimiento padecido producto de la denuncia e interposición de la querella criminal, la difusión de ésta a través de la prensa, y por el hecho de haber sido privado de libertad por este motivo. Sin embargo, la denuncia y la interposición de la querella no causó el efecto mediático que esgrime el actor, por cuanto lo que en realidad se ventiló públicamente fueron las constantes investigaciones de que fue objeto, los numerosos juicios que tuvo que enfrentar y las sentencias que lo removieron de las quiebras que administraba; de forma tal que no existe relación causal entre uno y otro hecho.

OCTAVO: Que, como fundamentos de su pretensión, el demandante acompañó la siguiente prueba documental:

1) A fojas 1 y 2, tabla de desarrollo de los ingresos percibidos en diversas quiebras, entre los años 1997 y 2012, por un monto total de \$443.274.894.

2) A fojas 127, fotocopia de decreto expedido por doña Michelle Bachelet Jeria, que excluye a don Daniel Isaías Vásquez Medina de la tercera nómina nacional de síndicos, en virtud de la causal contemplada en el N° 9 del artículo 22 de la Ley N° 18.175.

3) A fojas 138 y siguientes, copia de sentencia pronunciada con fecha 31 de enero de 2014, por la Corte de Apelaciones de Santiago, en causa Rol 1236-13, que revoca la sentencia de 22 de mayo de 2013, que condenó a don Daniel Vásquez Medina como autor del delito de apropiación indebida y declara que se le absuelve de la acusación.



4) A fojas 145, copia de resolución pronunciada con fecha 19 de febrero de 2014, por la Corte de Apelaciones de Santiago, en causa Rol 1236-2013, que tiene por interpuesto el recurso de casación en el fondo deducido por la querellante Superintendencia de Quiebras, en contra del fallo de 31 de enero de 2014.

5) A fojas 146 y siguientes, copia de resolución pronunciada con fecha 17 de abril de 2014, por la Corte Suprema, en causa Rol 4706-14, que declara inadmisibile el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia de segunda instancia, que revocó la de primer grado, que condenaba a don Daniel Vásquez Medina como autor del delito de apropiación indebida.

6) A fojas 216 y siguientes, copia de declaración judicial de don Santiago Raúl Nettle Rojo.

7) A fojas 222 y siguientes, copia de declaración judicial de don Adolfo Marcelo Ortega Aichele.

8) A fojas 225 y siguientes, copia de declaración judicial de don Adolfo Marcelo Ortega Aichele, prestada en causa Rol E-125-212, del 1° Juzgado Civil de Concepción, caratulada “Vásquez con Fisco de Chile”.

9) A fojas 232 y siguientes, copia de declaración judicial de don Adolfo Marcelo Ortega Aichele, prestada en causa Rol E-51-2014, del 3° Juzgado Civil de Concepción, caratulada “Vásquez con Fisco de Chile”.

10) A fojas 235 y siguientes, copia de declaración judicial de don Adolfo Marcelo Ortega Aichele, prestada en causa Rol 13125-2012, del 4° Juzgado Civil de Santiago, caratulada “Vásquez con Superintendencia de Quiebras”.

11) A fojas 241 y siguientes, copia de declaraciones judiciales prestadas por don Marco Antonio Figueroa Poblete y don Christian Gonzalo Araya Vallespir, prestadas en causa Rol E-1628-2018, del 1° Juzgado Civil de Concepción, caratulada “Vásquez con Superintendencia de Quiebras”.

12) A fojas 245 y 246, copia de declaración judicial de don Mario Alcides Henríquez Ortega.



13) A fojas 247 y 248, copia de declaración judicial de doña María Angélica Vargas Egaña.

14) A fojas 249, copia de declaración judicial de don Luis Ricardo Cartagena Núñez.

15) A fojas 250 y 251, copia de declaración judicial de don Diego Abdón Lira Silva.

16) A fojas 252, copia de declaración judicial de don Héctor Patricio Navarrete Aris

17) A fojas 253, copia de declaración judicial de don Gonzalo Andrés Ripamonti Zañartu.

18) A fojas 254 y siguientes, copia de declaraciones judiciales de doña María Esther López Di Rubba.

19) A fojas 258, copia de declaración judicial de don Marcos Parga Yávar.

20) A fojas 59, copia de declaración judicial de doña María Esther López Di Rubba.

21) A fojas 275 y 276, copia de escrito presentado con fecha 24 de marzo de 2006, por don Daniel Vásquez, en causa Rol 90.071-3 del 2° Juzgado del Crimen de San Miguel, por medio del cual solicita diligencias que señala.

22) A fojas 277, copia de certificado emitido con fecha 13 de abril de 2006, por la secretaria subrogante del 2° Juzgado del Crimen de San Miguel, haciendo constar que ante dicho tribunal se sigue la causa Rol N° 90.071-3, en contra de don Daniel Vásquez Medina por infracción a la ley de prenda sin desplazamiento.

23) A fojas 278 y 279, copia de escrito presentado con fecha 26 de abril de 2006, por don Daniel Vásquez Medina, en causa Rol 90.071-3 del 2° Juzgado del Crimen de San Miguel, por medio del cual solicita cite a declarar a las personas que indica y acompaña documentos.



24) A fojas 281 y siguientes, copia de escrito presentado con fecha 02 de mayo de 2006, por la Superintendencia de Quiebras, en causa Rol 90.071-3 del 2° Juzgado del Crimen de San Miguel, por medio de la cual deduce recurso de reposición en contra de la resolución que ordenó la citación de don Diego Lira Silva y de la resolución que la acoge.

25) A fojas 285 y siguientes, copia de escrito presentado con fecha 01 de junio de 2006, por don Daniel Vásquez Medina, en causa Rol 90.071-3 del 2° Juzgado del Crimen de San Miguel, por medio del cual hace presente los hechos que indica y solicita se cite a declarar a don Diego Lira Silva.

26) A fojas 288 y 299, copia de Oficio Ordinario N° 854/2006, enviado por el jefe del Centro de Reinserción Social Santiago Sur, para Sr. Magistrado del 2° Juzgado del Crimen de San Miguel, remitiendo informe presentencial de don Daniel Vásquez Medina.

27) A fojas 290 y siguientes, copia de escrito presentado con fecha 28 de noviembre de 2007, por don Daniel Vásquez Medina, en causa Rol 90.071-3 del 2° Juzgado del Crimen de San Miguel, por medio del cual solicita se deje sin efecto el auto de procesamiento dictado en su contra y de la resolución que lo rechaza.

28) A fojas 297 y siguientes, copia de escrito presentado con fecha 06 de diciembre de 2007, por don Daniel Vásquez Medina, en causa Rol 90.071-3 del 2° Juzgado del Crimen de San Miguel, por medio del cual apela de la resolución que rechazó la petición de dejar sin efecto el auto de procesamiento dictado en su contra y de la resolución que lo tiene por interpuesto.

29) A fojas 305 y siguientes, copia de diversos escritos presentados por Daniel Vásquez Medina, ante la Corte de Apelaciones de San Miguel y de las resoluciones que los proveen.

30) A fojas 312 y siguientes, copia de resolución pronunciada con fecha 12 de agosto de 2008, por la Corte de Apelaciones de San Miguel, en causa Rol 1797-2007-cri, que revoca la resolución apelada de fecha 01 de diciembre de 2007 y en su lugar se declara que se deja sin efecto el auto de



procesamiento de fecha 05 de octubre de 2005 y que don Daniel Vásquez Medina no es procesado por ahora en esta causa.

31) A fojas 316 y siguientes, copia de escrito presentado con fecha 14 de agosto de 2008, por don Daniel Vásquez Medina, ante el 8° Juzgado del Crimen de San Miguel, por medio del cual solicita acumulación al proceso de la causa Rol N° 81.688 del ex 2° Juzgado del Crimen de San Miguel y de la resolución que le da lugar.

32) A fojas 319 y siguientes, copia de escrito presentado con fecha 28 de septiembre de 2008, ante el 8° Juzgado del Crimen de San Miguel, por don Daniel Vásquez Medina, querellante por el delito de alzamiento de prenda, en causa Rol 81.688-5 del 2° Juzgado del Crimen de San Miguel, por medio del cual solicita se dicte auto de procesamiento en contra de los querellados don Oscar Sánchez Asmat y don Antonio Bocanegra Hidalgo.

33) A fojas 325 y siguientes, copia de escrito presentado con fecha 07 de octubre de 2008, por don Daniel Vásquez Medina, ante el 8° Juzgado del Crimen de San Miguel, en causa Rol 81.688-5 del 2° Juzgado del Crimen de Santiago, por medio del cual solicita se cite a declarar a las personas que indica y de la resolución que le da lugar.

34) A fojas 328 y siguientes, copia de escrito presentado con fecha 30 de octubre de 2008, ante el 8° Juzgado del Crimen de San Miguel, por don Daniel Vásquez Medina, en causa Rol 81.688-5 del 2° Juzgado del Crimen de San Miguel, por medio del cual solicita se dicte auto de procesamiento en contra de los querellados don Oscar Sánchez Asmat y don Antonio Bocanegra Hidalgo.

35) A fojas 334 y siguientes, copia de escrito presentado con fecha 05 de noviembre de 2008, por don Daniel Vásquez Medina, ante el 8° Juzgado del Crimen de San Miguel, en causa Rol 81.688-5 del 2° Juzgado del Crimen de Santiago, por medio del cual solicita oficio a la Superintendencia de Quiebras y de la resolución que lo provee.

36) A fojas 341 y 342, copia de escrito presentado con fecha 12 de marzo de 2009, por don Daniel Vásquez Medina, ante el 8° Juzgado del



Crimen de San Miguel, en causa Rol 81.688-5 del 2° Juzgado del Crimen de San Miguel, por medio del cual solicita ampliación de prueba practicada en la investigación.

37) A fojas 342, copia de escrito presentado con fecha 29 de marzo de 2009, por don Daniel Vásquez Medina, ante el 8° Juzgado del Crimen de San Miguel, en causa Rol 81.688-5 del 2° Juzgado del Crimen de San Miguel, por medio del cual solicita se cite a declarar a don Mario Henríquez Ortega.

38) A fojas 343 y 344, copia de escrito presentado con fecha 29 de marzo de 2009, por don Daniel Vásquez Medina, ante el 8° Juzgado del Crimen de San Miguel, en causa Rol 81.688-5 del 2° Juzgado del Crimen de San Miguel, por medio del cual solicita se cite a declarar a don Diego Lira Silva.

39) A fojas 345 y siguientes, copia de escrito presentado con fecha 27 de mayo de 2009, por don Daniel Vásquez Medina, ante el 8° Juzgado del Crimen de San Miguel, en causa Rol 81.688-5 del 2° Juzgado del Crimen de San Miguel, por medio del cual reitera solicitud de que dicte auto de procesamiento en contra de los querellados don Oscar Sánchez Asmat y don Antonio Bocanegra Hidalgo.

40) A fojas 348 y 349, copia de escrito presentado con fecha 24 de julio de 2009, por don Daniel Vásquez Medina, ante el 8° Juzgado del Crimen de San Miguel, en causa Rol 81.688-5 del 2° Juzgado del Crimen de San Miguel, por medio del cual reitera solicitud de que dicte auto de procesamiento en contra de los querellados don Oscar Sánchez Asmat y don Antonio Bocanegra Hidalgo.

41) A fojas 350, copia de escrito presentado con fecha 09 de octubre de 2009, por don Daniel Vásquez Medina, ante el 8° Juzgado del Crimen de San Miguel, en causa Rol 81.688-5 del 2° Juzgado del Crimen de San Miguel, por medio del cual reitera solicitud de que dicte auto de procesamiento en contra de los querellados don Oscar Sánchez Asmat y don Antonio Bocanegra Hidalgo.



42) A fojas 351, copia de escrito presentado con fecha 11 de febrero de 2010, por don Daniel Vásquez Medina, ante el 8° Juzgado del Crimen de San Miguel, en causa Rol 81.688-5 del 2° Juzgado del Crimen de San Miguel, por medio del cual reitera solicitud de que dicte auto de procesamiento en contra de los querellados don Oscar Sánchez Asmat y don Antonio Bocanegra Hidalgo.

43) A fojas 352 y 353, copia de escrito presentado -fecha ilegible-, por don Daniel Vásquez Medina, ante el 8° Juzgado del Crimen de San Miguel, en causa Rol 81.688-5 del 2° Juzgado del Crimen de San Miguel, por medio del cual reitera solicitud de que dicte auto de procesamiento en contra de los querellados don Oscar Sánchez Asmat y don Antonio Bocanegra Hidalgo.

44) A fojas 354, copia de resolución pronunciada con fecha 17 de noviembre de 2010, por la Corte de Apelaciones de San Miguel, en causa Rol 497-2010-cri, que confirma la resolución apelada de fecha 21 de septiembre de 2010.

45) A fojas 355, copia de carta de fecha 21 de enero de 1999, enviada por don Oscar Lelio Sánchez, para Sres. Banco A. Edwards, por medio de la cual le hace llegar su oferta para una máquina modelo 1980 reacondicionada en 1992, para inyección de suelas PU de Protenns S.A., correspondiente a la prenda que tienen sobre ella.

46) A fojas 356, copia de carta de fecha 29 de enero de 1999, enviada por don Daniel Vásquez Medina, síndico interventor liquidador, para Sres. Banco A. Edwards, por medio de la cual hace llegar la oferta de comprar por parte de don Guillermo Sánchez de la máquina inyectora marca Niágara.

47) A fojas 357, copia de carta de fecha 26 de febrero de 1999, enviada por Banco A. Edwards, para don Daniel Vásquez Medina, por medio de la cual informa que autoriza la venta de la máquina inyectora marca Niágara y matrices de aluminio, prendadas a su favor.

48) A fojas 358 y 359, copia de carta de fecha 01 de marzo de 2000, enviada por Daniel Vásquez Medina, para Sres. Suministros Industriales Pucón Ltda., por medio de la cual informa que en su calidad de síndico de



quiebras del Convenio Judicial Preventivo Protenns S.A., concurrió hasta el domicilio de Avenida Vicuña Mackenna N° 3207, comuna de San Joaquín, con el objeto de retirar la máquina rotativa para inyección de poliuretano, la que es de propiedad de Prottenns S.A. en liquidación y que recibieron en depósito en tanto negociaban con el Banco A. Edwards el alzamiento de la prenda que afectaba a la misma, no pudiendo cumplir con su cometido, ya que la máquina fue trasladada con destino desconocido, sin autorización ni de su propietaria ni del acreedor prendario.

49) A fojas 361 y siguientes, copia de Oficio S.Q. N° 534, de fecha 16 de abril de 2004, de don Diego Lira Silva, superintendente de quiebras, a Sra. Irma Meurer Moltalva, presidenta Corte de Apelaciones de Concepción, por medio de la cual solicita que instruya a los señores jueces de los tribunales de su jurisdicción, para que cuando reciban solicitudes de autorizaciones no contempladas expresamente en la ley, de parte de los síndicos de quiebras don Daniel Vásquez Medina y don Adolfo Ortega Aichele, previo a resolver, pidan informe a la Superintendencia de Quiebras.

50) A fojas 364 y siguientes, copia de Oficio Ordinario S.Q. N° 1791, de fecha 20 de noviembre de 2002, de don Diego Silva Lira, superintendente de quiebras, a Sr. José Antonio Gómez Urrutia, ministro de justicia, por medio del cual informa en relación al artículo de prensa aparecido en la revista Qué Pasa, el día 15 de noviembre de 2002, relativo a hechos denunciados por el síndico de quiebras señor Daniel Vásquez Medina, sobre una supuesta red de influencias en el seno de la institución, afectando especialmente al abogado jefe de la superintendencia.

51) A fojas 370 y siguientes, copia de Oficio Ordinario S.Q. N° 1103, de fecha 11 de julio de 2003, de don Diego Lira Silva, superintendente de quiebras, a Sr. Francisco Cruz Fuenzalida, jefe de gabinete del ministro de justicia, que informa en relación a su solicitud de informe respecto de la carta suscrita por el síndico de quiebras señor Daniel Vásquez Medina en la que denuncia una supuesta persecución de que habría sido objeto por parte del superintendente de quiebras y por el abogado jefe del servicio.



52) A fojas 391 y siguientes, copia de Oficio S.Q. N° 842, de fecha 23 de junio de 2005, de don Diego Lira Silva, superintendente de quiebras, a Sr. Luis Bates Hidalgo, ministro de justicia, que solicita pedir al organismo contralor que reconsidere su opinión, en relación con el pronunciamiento contenido en el oficio 26560 de la Contraloría General de la República, referido a la aceptación de la renuncia a la Nómina Nacional de un síndico que se encuentra removido de otras quiebras, habiendo deducido el afectado recursos de apelación, los que se encuentran pendientes.

53) A fojas 396 y 397, copia de Resolución Interna S.Q. N 423, de fecha 23 de julio de 2002, de la Superintendencia de Quiebras, relativo a los actos, documentos y antecedentes que están afectos al secreto reserva.

54) A fojas 398 y 399, copia de Oficio Ordinario S.Q. N° 519, de fecha 19 de abril de 2005, de don Diego Lira Silva, superintendente de quiebras, a Sr. Francisco Cruz Fuenzalida, jefe de gabinete ministro de justicia, que informa en relación a la carta de 06 de abril de 2005, en la que el síndico de quiebras señor Daniel Vásquez Medina, representa ante el señor ministro de justicia una supuesta inhabilidad de su persona para fiscalizarlo y le solicita que le designe otro fiscalizador.

55) A fojas 421 y siguientes, copia de publicación de revista Qué Pasa, titulada “Disparos cruzados en la Super de Quiebras”.

56) A fojas 425, copia de publicación de diario El Mercurio, de fecha 23 de diciembre de 2005, titulada “San Miguel: Corte ratifica prisión de síndico, Daniel Vásquez tiene ilícitos en Santiago y VII Región”.

57) A fojas 426 y siguientes, copia de publicación de Emol, de fecha 29 de junio de 2004, titulada “Diego Lira explica reforma al sistema que remece las quiebras en Chile”.

58) A fojas 429 y 430, copia de publicación de El Mostrador, de fecha 22 de junio de 2004, titulada “Diputados UDI tranquilos ante resolución por solicitud de desafuero, informe de Superintendencia de Quiebras les da la razón”.



59) A fojas 431, copia de publicación de El Sur, de fecha 28 de junio de 2004, titulada “Juez inicia indagación ordenada por C. Suprema”.

60) A fojas 432, copia de publicación de El Sur, de fecha 27 de junio de 2004, titulada “Presuntas irregularidades”.

61) A fojas 433, copia de publicación de El Sur, de fecha 25 de junio de 2004, titulada “Abren una investigación por presunta asociación ilícita”.

62) A fojas 434, copia de publicación de El Sur, de fecha 24 de junio de 2004, titulada “Suprema ordenó indagar relación jueces-síndicos”.

63) A fojas 435, copia de publicación de El Sur, de fecha 17 de junio de 2004, titulada “En acuerdo desafuero de diputados”.

64) A fojas 436 y siguientes, copia de publicación de El Sur, de fecha 16 de abril de 2004, titulada “La caída de un síndico”.

65) A fojas 439, copia de publicación de El Sur, de fecha 13 de abril de 2004, titulada “Diputados UDI insisten en denuncia contra síndicos”.

66) A fojas 440, copia de publicación de El Sur, de fecha 05 de abril de 2004, titulada “Denuncian millonarios fraudes, autores serían síndicos locales”.

67) A fojas 441, copia de publicación de El Sur, de fecha 06 de abril de 2004, titulada “Ministra Meurer aclaró denuncias sobre síndicos”.

68) A fojas 442, copia de publicación de El Sur, de fecha 09 de abril de 2004, titulada “Diputados UDI piden más transparencia en quiebras”.

69) A fojas 443, copia de publicación de Radio Chilena, de fecha 29 de junio de 2004, titulada “Concepción: designan ministro en visita para investigar participación de jueza en una asociación ilícita”.

70) A fojas 444, copia de publicación de Radio Chilena, de fecha 29 de junio de 2004, titulada “Documento oficial sobre quiebras plantea serias consecuencias a implicados en caso penquista”.



71) A fojas 445, copia de publicación de Radio Cooperativa -fecha ilegible- titulada “Corte nombró ministro para investigar denuncia por irregularidades contra jueza”.

72) A fojas 446, copia de publicación titulada “Tenso ambiente rodea a jueza denunciada por quiebras”.

73) A fojas 447, copia de publicación de Teletrece Internet, de fecha 29 de junio de 2004, titulada “Revuelo por denuncia en contra de jueza y síndicos penquistas”.

74) A fojas 448 y 449, copia de publicación de El Mercurio, de fecha 31 de marzo de 2004, titulada “Quiebras: por primera vez dan de baja a un síndico”.

75) A fojas 450, copia de publicación de Teletrece Internet, de fecha 29 de junio de 2004, titulada “Investigan posible asociación ilícita que infringiría la Ley de Quiebras”.

76) A fojas 451 y siguientes, copia de publicación de El Mostrador, de fecha 22 de junio de 2004, titulada “Diputados UDI tranquilos ante resolución por solicitud de desafuero”.

77) A fojas 458, copia de publicación de El Mercurio, de fecha 25 de junio de 2004, titulada “Ministro investigará a dos síndicos y a una jueza”.

78) A fojas 460, copia de publicación de Cooperativa.cl, de fecha 24 de junio de 2004, titulada “Corte nombró ministro para investigar denuncia por irregularidades contra jueza”.

79) A fojas 461, copia de publicación de El Mercurio, de fecha 26 de junio de 2004, titulada “Denuncia contra síndicos, diputados UDI no serán desaforados”.

80) A fojas 462, copia de publicación de Cooperativa.cl, de fecha 22 de julio de 2004, titulada “Diputados UDI presentaron querella contra dos síndicos de quiebras en Concepción”.



81) A fojas 463, copia de publicación de El Mercurio, de fecha 25 de junio de 2004, titulada “Ministro investigará a dos síndicos y a una jueza”.

82) A fojas 64, copia de publicación de El Sur, de fecha 31 de marzo de 2003, titulada “Con tres proyectos de ley se mejorará sistema de quiebras”.

83) A fojas 465, copia de publicación de El País, de fecha 06 de octubre de 2003, titulada “Los síndicos rendirán examen”.

84) A fojas 466, copia de publicación de El Sur, de fecha 05 de abril de 2004, titulada “Denuncian millonarios fraudes, autores serían síndicos locales”.

85) A fojas 467, copia de publicación titulada “Corte ratifica prisión de síndico, Daniel Vásquez tiene ilícitos en Santiago y VII Región”.

86) A fojas 471 y 472, copia de Oficio Ordinario S.Q. N° 1063, de fecha 10 de junio de 2011, de superintendente de quiebras, a don Daniel Vásquez Medina, que informa, en relación a su solicitud de información respecto de todas las querellas interpuestas por la Superintendencia de Quiebras, en contra de síndicos que componen la nómina nacional.

87) A fojas 473 y siguientes, copia de carta de fecha 12 de noviembre de 2002, enviada por don Diego Lira Silva, superintendente de quiebras, para Sr. Francisco Cruz Fuenzalida, jefe de gabinete subsecretario de justicia, que informa en relación a la nota suscrita por el síndico de quiebras señor Daniel Vásquez, mediante la cual informa al señor ministro de justicia en relación a la querella criminal por corrupción interpuesta en contra del abogado jefe del departamento jurídico de la superintendencia.

88) A fojas 476, copia de escrito presentado con fecha 26 de mayo de 2006, en causa Rol 3327-1997 del 2° Juzgado Civil de Santiago, por don Patricio Navarrete Aris, abogado jefe de la Superintendencia de Quiebras, que informa procesamiento y remoción del síndico Daniel Vásquez.

89) A fojas 477 y siguientes, copia de escrito presentado con fecha 20 de junio de 2005, en causa Rol 1363-1999 del 13° Juzgado Civil de Santiago, por don Patricio Navarrete Aris, abogado jefe de la Superintendencia de



Quiebras, informando que la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó remoción del síndico Vásquez y de la resolución que la provee.

90) A fojas 483 y 484, copia de escrito presentado por don Héctor Navarrete Aris, en causa Rol 1365-99 del 13° Juzgado Civil de Santiago, por medio del cual hace presente que el síndico señor Daniel Vásquez Medina fue nuevamente sometido a proceso.

91) A fojas 485 y 486, copia de escrito presentado por don Héctor Navarrete Aris, en causa Rol 1363-99 del 13° Juzgado Civil de Santiago, por medio del cual hace presente que el síndico señor Daniel Vásquez Medina fue removido nuevamente en quiebra de Coronel.

92) A fojas 489 y siguientes, copia de denuncia interpuesta con fecha 11 de diciembre de 2002, por don Diego Lira Silva, superintendente de quiebras, ante el 2° Juzgado del Crimen de San Miguel, en contra del síndico de quiebras señor Daniel Vásquez Medina, por el delito consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Ley 18.112, sobre prenda sin desplazamiento y de la resolución que la admite a tramitación.

93) A fojas 495 y siguientes, copia de escrito presentado con fecha 24 de abril de 2003, por don Diego Silva Lira, en causa Rol 90.071-3 del 2° Juzgado del Crimen de San Miguel, por medio del cual solicita conocimiento de sumario y de la resolución que lo rechaza.

94) A fojas 500 y siguientes, copia de escrito presentado con fecha 13 de mayo de 2003, por don Diego Silva Lira, en causa Rol 90.071-3 del 2° Juzgado del Crimen de San Miguel, por medio del cual solicita se cite a declarar a don Daniel Vásquez Medina, bajo apercibimiento de arresto y de la resolución que lo provee.

95) A fojas 507, copia de escrito presentado por don Diego Silva Lira, en causa Rol 90.071-3 del 2° Juzgado del Crimen de San Miguel, por medio del cual solicita ampliación de la orden de aprehensión y de la resolución que le da lugar.

96) A fojas 509 y siguientes, copia de Parte N° 7186, de fecha 17 de septiembre de 2003, de la Brigada de Investigación Criminal San Miguel, para



el 2° Juzgado del Crimen de San Miguel, relativo a orden de aprehensión en contra de don Daniel Vásquez Medina.

97) A fojas 512 y 513, copia de declaración judicial de don Daniel Vásquez Medina, de fecha 17 de septiembre de 2003.

98) A fojas 514 y siguientes, copia de escrito presentado con fecha 17 de septiembre de 2003, por don Diego Silva Lira, en causa Rol 90.071-3 del 2° Juzgado del Crimen de San Miguel, por medio del cual solicita se sirva tener como parte a la Superintendencia de Quiebras y de la resolución que lo provee.

99) A fojas 517, copia de declaración judicial de don Daniel Vásquez Medina, de fecha 23 de septiembre de 2003.

100) A fojas 518 y siguientes, copia de escrito presentado con fecha 23 de septiembre de 2003, por don Daniel Vásquez Medina en causa Rol 90.071-3 del 2° Juzgado del Crimen de San Miguel, por medio del cual hace presente los hechos que indica y de la resolución que lo provee.

101) A fojas 521, copia de escrito presentado con fecha 03 de octubre de 2003, por don Daniel Vásquez Medina en causa Rol 90.071-3 del 2° Juzgado del Crimen de San Miguel, por medio del cual plantea incidente de nulidad procesal.

102) A fojas 536 y 537, copia de certificado emitido por el 11° Juzgado del Crimen de San Miguel, que certifica haber tenido a la vista la causa Rol 81.688-3, iniciada el 31 de mayo de 2000, por el delito de Ley de Prenda sin Desplazamiento, por querella interpuesta por don Daniel Vásquez Medina.

103) A fojas 538, copia de resolución del 11° Juzgado del Crimen de San Miguel, dictada en causa Rol 81.688, que declara cerrado el sumario.

104) A fojas 539 y siguientes copia de escrito presentado con fecha 07 de septiembre de 2004, por la Superintendencia de Quiebras en causa Rol 90.071-3 del 11° Juzgado del Crimen de San Miguel, por medio del cual solicita reapertura del sumario; de la resolución que le niega lugar; del escrito de apelación y de la resolución que tiene por interpuesto dicho recurso.



105) A fojas 552 y siguientes copia de escrito presentado con fecha 04 de diciembre de 2004, por don Daniel Vásquez Medina, ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, en causa Rol 3608-04 vista conjuntamente con Rol 3629-04, haciendo presente que los mismo hechos en que se funda la denuncia en su contra, fueron conocidos en proceso Rol 81.688-5 del 2° Juzgado del Crimen de San Miguel, iniciado por querrela criminal de su parte en contra de don Oscar Sánchez y otro, por apropiación indebida de la misma máquina de autos, por infracción a la Ley de Prenda sin Desplazamiento, a través de la sociedad Suministros Industriales Pucón Ltda., proceso que terminó por sobreseimiento, porque se estimó que esos hechos no ameritaban procesar a esos querrellados por los señalados delitos y de la resolución que lo provee.

106) A fojas 556 y siguientes, copia de diversos escritos presentados ante la Corte de Apelaciones de San Miguel en causa Rol 3608-04 y de las resoluciones que los proveen.

107) A fojas 570 y siguientes, copia de querrela criminal interpuesta con fecha 16 de agosto de 2005, ante el 2° Juzgado del Crimen de San Miguel, por don Diego Lira Silva, superintendente de quiebras, en contra de don Daniel Vásquez Medina, como autor del delito consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Ley sobre Prenda sin Desplazamiento y de la resolución que la admite a tramitación.

108) A fojas 575 y siguientes, copia de escrito presentado con fecha 14 de septiembre de 2005, por don Diego Lira Silva, en causa Rol 90.071-3 del 2° Juzgado del Crimen de San Miguel, por medio del cual solicita someter a proceso a don Daniel Vásquez Medina, como autor del delito consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Ley sobre Prenda sin Desplazamiento.

109) A fojas 584, copia de resolución pronunciada con fecha 05 de octubre de 2005, por el 2° Juzgado del Crimen de San Miguel, que declara que se somete a proceso a don Daniel Vásquez Medina como autor del delito de infracción a la Ley de Prenda sin Desplazamiento, previsto y sancionado en los artículos 18 y 19 de la Ley 18.112.



110) A fojas 587 y siguientes, copia de Parte N° 6415, de fecha 13 de octubre de 2005, de la Brigada de Investigación Criminal San Miguel, para el 2° Juzgado del Crimen de San Miguel, relativo a orden de detención en contra de don Daniel Vásquez Medina.

111) A fojas 592, copia de resolución pronunciada con fecha 15 de marzo de 2006, por la Corte de Apelaciones de San Miguel, en causa Rol 1637-2006-exc que revoca la resolución apelada de 13 de marzo y se declara que se concede la libertad provisional a don Daniel Vásquez Medina, bajo fianza.

NOVENO: Que, la demandada Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento acompañó los siguientes documentos:

1) A fojas 596 y siguientes, copia de Oficio S.I.R. N° 74, de fecha 05 de junio de 2014, de Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, a Sra. Irma Soto Rodríguez, abogado procurador fiscal de Santiago, que informa en relación a su solicitud de antecedentes relativos a la demanda civil de indemnización de perjuicios deducida por el ex síndico señor Daniel Vásquez Medina y tramitada en causa Rol 5625-2014 del 4° Juzgado Civil de Santiago.

2) A fojas 605 y 606, copia de Decreto N° 651 del Ministerio de Justicia, de fecha 27 de junio de 1996, que nombra a don Daniel Vásquez Medina como síndico privado de quiebras para que ejerza sus funciones en las Regiones Metropolitana y Octava y lo incluye en la Tercera Nómina Nacional de Síndicos y de su publicación en el Diario Oficial, de fecha 25 de julio de 1996.

3) A fojas 607 y 608, copia de Decreto N° 889 del Ministerio de Justicia, de fecha 14 de julio de 2006, que excluye, en virtud de la causal contemplada en el N° 9 del artículo 22 de la Ley N° 18.175, a don Daniel Vásquez Medina de la Tercera Nómina Nacional de Síndicos.

4) A fojas 609 y siguientes, copia de Oficio Ordinario S.Q. N° 523, de fecha 15 de abril de 2004, de don Diego Lira Silva, superintendente de quiebras, a Sr. subsecretario de justicia, que informa en relación a su solicitud de informe respecto de la carta suscrita por el síndico de quiebras señor Daniel



Vásquez Medina presentada ante el Ministerio de Justicia, en la que formula su renuncia al cargo de síndico de quiebras.

5) A fojas 620 y siguientes, copia de dictamen pronunciado con fecha 26 de agosto de 2002, por el fiscal instructor en sumario administrativo iniciado para investigar la denuncias formuladas por el síndico señor Daniel Vásquez Medina, en contra de funcionarios de la Fiscalía Nacional de Quiebras, que propone al Sr. Superintendente de Quiebras el sobreseimiento del sumario y el archivo de los antecedentes, por no haberse acreditado durante la investigación la veracidad de los hechos denunciados.

6) A fojas 645, copia de Resolución Exenta S.Q. N° 75 de la Superintendencia de Quiebras, de fecha 26 de agosto de 2002, que acoge la proposición del Sr. fiscal instructor, contenida en dictamen de 26 de agosto de 2002 y se sobresee el sumario administrativo ordenado instruir por resolución interna F.N. N° 174 de 28 de junio de 2000.

7) A fojas 646, copia de carta de fecha 22 de diciembre de 2003, enviada por don Daniel Vásquez Medina, para Sr. Luis Bates Hidalgo, ministro de justicia, por medio de la cual formula su renuncia al cargo de síndico de quiebras.

8) A fojas 647 y siguientes, copia de escrito presentado por don Diego Lira Silva, con fecha 15 de mayo de 2003, en causa Rol 550-2000 del Juzgado de Letras de Tomé, sobre quiebra de Sociedad Maderas Dichato Ltda., por medio del cual solicita la remoción del síndico titular definitivo don Daniel Vásquez Medina, por haber incurrido en faltas graves e irregularidades en relación a su desempeño.

9) A fojas 657 y 658, copia de escrito presentado con fecha 25 de marzo de 2004, por don Patricio Navarrete Aris, en causa Rol 2717-4-98, Tomo VI, del 32° Juzgado del Crimen de Santiago, a través del cual solicita que se certifiquen los hechos que indica y de la resolución que lo provee.

10) A fojas 659 y 660, copia de escrito presentado con fecha 02 de abril de 2004, por don Patricio Navarrete Aris, en causa Rol 2717-4-98, Tomo V,



del 32° Juzgado del Crimen de Santiago, a través del cual solicita que se certifiquen los hechos que indica y de la resolución que lo provee.

11) A fojas 661, copia de escrito presentado con fecha 03 de diciembre de 2003, por el Banco A. Edwards, en causa Rol 3064-01 del 2° Juzgado de Letras de Coronel, por medio del cual objeta la cuenta rendida por el síndico de quiebras señor Daniel Vásquez Medina, específicamente en el tema de honorarios, por no ajustarse al mérito del proceso.

12) A fojas 662 y siguientes, copia de escrito presentado con fecha 09 de diciembre de 2003, por el Banco Santander-Chile, en causa Rol 64-2001 del 2° Juzgado de Letras de Coronel, por medio del cual objeta la cuenta definitiva presentada por el síndico don Daniel Vásquez Medina, respecto de la administración de la quiebra de Comercializadora Camposur S.A.

13) A fojas 667 y siguientes, copia de Oficio S.Q. N° 842, referido en el numeral 52) del motivo precedente.

14) A fojas 672 y siguientes, copia de denuncia referida en el número 92) del considerando anterior.

15) A fojas 675 y siguientes, copia de Oficio Ordinario S.Q. N° 1103, reseñado en el numeral 51) del apartado que precede.

16) A fojas 697 y siguientes, copia de querella criminal relacionada en el número 107) del motivo precedente.

17) A fojas 703 y siguientes, copia de escrito referido en el número 108) del considerando que antecede.

18) A fojas 711, copia de resolución reseñada en el numeral 109) del motivo anterior.

DÉCIMO: Que, finalmente, se tuvo a la vista la causa Rol 13125-2012 de este mismo Tribunal, sobre indemnización de perjuicios, interpuesta por don Daniel Vásquez Medina, en contra de la Superintendencia de Quiebras y de don Héctor Patricio Navarrete Aris, la que fue rechazada por sentencia definitiva de fecha 05 de junio de 2015 y confirmada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.



UNDÉCIMO: Que, el actor ha deducido demanda de indemnización de perjuicios en contra de don Diego Lira Silva y de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, solicitando se le indemnicen los daños patrimoniales y morales padecidos a consecuencia de la denuncia y posterior querrella criminal que interpuso en su contra el ex superintendente de quiebras, careciendo de las facultades legales para ello, con la sola intención de dañar su honra y dignidad, generando como consecuencia que se dictara auto de procesamiento en su contra, decretándose su privación de libertad por más de 5 meses; que se le difamara por los medios de prensa; y, que se viera obligado a renunciar a su cargo de síndico de quiebras.

DUODÉCIMO: Que, sobre el particular, el demandado Sr. Lira Silva opone las siguientes defensas: excepción de prescripción; que no resulta jurídicamente posible que una persona natural sea solidariamente responsable con el Estado; que el demandante no ha indicado en que consiste la falta de servicio en que habrían incurrido los demandados; y, la no concurrencia de los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual.

Por su parte, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, deduce las siguientes alegaciones: excepción de prescripción; improcedencia de la acción por falta del requisito previo de declaración de error judicial; improcedencia de la acción por falta de declaración previa de denuncia o querrella calumniosa; inimputabilidad del Estado por los eventuales perjuicios que puedan derivarse de las decisiones de un tribunal; inexistencia de responsabilidad extracontractual del Estado por actuaciones de los jueces en el ejercicio de sus funciones; e, inconcurrencia de los requisitos para configurar la responsabilidad extracontractual.

DÉCIMO TERCERO: Que, cabe señalar que son hechos de la causa, por no estar controvertidos entre las partes y además, por encontrarse acreditados en virtud de las probanzas aportadas al proceso, relacionadas en los numerales 30), 92), 98), 107), 108), 109), 110) y 111) del motivo octavo y 14), 16), 17) y 18) del considerando noveno, los siguientes:

1. Que, con fecha 11 de diciembre de 2002, el superintendente de quiebras, Sr. Diego Lira Silva, interpuso denuncia en contra de don Daniel



Vásquez Medina, por el delito consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Ley 18.112, sobre prenda sin desplazamiento, fundado en que en su calidad de síndico interventor y liquidador del convenio judicial preventivo de “Protenns S.A.”, entregó uno de los bienes objeto de la liquidación, consistente en una máquina inyectora de poliuretano, respecto de la cual se había constituido una prenda sin desplazamiento en favor del Banco de A. Edwards, a la Sociedad Suministros Industriales Pucón S.A., sin el consentimiento previo del acreedor prendario, la que fue tramitada por el 2° Juzgado de Garantía de San Miguel, bajo el Rol 90.071-3.

2. Que, con fecha 17 de septiembre de 2003, la Superintendencia de Quiebras, se hizo parte en la causa Rol 90.071-3 del 2° Juzgado de Garantía de San Miguel.

3. Que, con fecha 10 de agosto de 2005, el superintendente de quiebras Sr. Diego Lira Silva, interpuso querella criminal en contra de Daniel Vásquez Medina, como autor del delito consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Ley 18.112 sobre Prenda sin Desplazamiento, la que fue acumulada a la causa Rol 90.071 del 2° Juzgado del Crimen de San Miguel, por tratarse de los mismos hechos e imputado.

4. Que, con fecha 14 de septiembre de 2005, don Diego Lira Silva, solicitó someter a proceso a don Daniel Vásquez Medina como autor del delito consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Ley 18.112, sobre Prenda sin Desplazamiento

5. Que, con fecha 05 de octubre de 2005, el 2° Juzgado de Garantía de San Miguel sometió a proceso a don Daniel Vásquez Medina, como autor del delito de infracción a la Ley de Prenda sin Desplazamiento, previsto y sancionado en los artículos 18 y 19 de la Ley 18.112 y ordenó despachar orden de aprehensión, por encontrarse justificado que un sujeto nombrado síndico interventor y liquidador del convenio judicial preventivo de la empresa Protenns S.A., en dicha calidad procedió a entregar una máquina rotativa para inyección de poliuretano a un tercero, que en definitiva la ocultó, y respecto de la cual se había constituido anteriormente prenda sin desplazamiento a favor del Banco A. Edwards, a la Sociedad de Suministros Industriales Pucón



S.A., sin el consentimiento expreso del acreedor, entrega que no podía efectuar por encontrarse sujeta a la referida ley, defraudando de esta manera al acreedor prendario.

6. Que, con fecha 13 de octubre de 2005, don Daniel Vásquez Medina fue detenido en su domicilio por la Policía de Investigaciones de Chile.

7. Que, con fecha 15 de marzo de 2006, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, concedió a don Daniel Vásquez Medina la libertad provisional, bajo fianza.

8. Que, con fecha 12 de agosto de 2008, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, dejó sin efecto el auto de procesamiento de fecha 05 de octubre de 2005 y declaró que don Daniel Vásquez Medina no será procesado por ahora.

DÉCIMO CUARTO: Que, para un adecuado y lógico desarrollo de la presente sentencia, se analizarán previamente las defensas de los demandados que no dicen relación con el fondo de la acción deducida, para posteriormente, en caso de ser procedente, entrar al conocimiento de la misma.

En este orden de ideas, y en relación con la excepción de prescripción opuesta por ambos demandados, cabe señalar que el artículo 2492 del Código Civil, define la prescripción, disponiendo que es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales.

A su vez, el artículo 2514 del Código Civil señala que la prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Este tiempo se cuenta desde que la obligación se haya hecho exigible.

Por su parte, el artículo 2332 del Código Civil, dispone que las acciones que concede este título por daño o dolo, prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto.



DÉCIMO QUINTO: Que, en orden a fundamentar la excepción en comento, don Diego Lira sostiene que los hechos de marras habrían ocurrido entre los años 2002 y 2005, por lo que teniendo en consideración lo dispuesto por los artículos 2314 y 2332 del Código Civil, ha operado la institución de la prescripción; mientras que la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento señala que el plazo de prescripción que establece el artículo 2332 del Código Civil debe contarse entre la fecha en que se produjo el o los hechos generadores del daño y la fecha en que fue notificada la demanda a su parte, por lo que el sobreseimiento temporal de la investigación criminal en la que dichos actos se produjeron, no tiene injerencia en la producción del año que el actor dice haber sufrido, resultando incorrecto computar el plazo de prescripción desde la fecha en que se sobreseyó la causa, como lo pretende el demandante, al afirmar que la acción no se encuentra prescrita, toda vez que en la causa en la que se perseguía su responsabilidad criminal se dictó sobreseimiento temporal con fecha 23 de diciembre del año 2010, fecha desde la cual, considera, debe contabilizarse el plazo de prescripción, pues solo a partir de dicho acto está en condiciones de demandar la indemnización de los perjuicios que solicita.

DÉCIMO SEXTO: Que, entonces, la controversia consiste en dirimir desde cuándo debe contabilizarse el plazo de prescripción, esto es, desde la interposición de la querrela criminal, ocurrida con fecha 10 de agosto de 2005 -pues ha sido el propio actor quien ha delimitado en la etapa de discusión dicha circunstancia como el hecho generador de los daños y perjuicios que reclama, al indicar que el superintendente de quiebras, Sr. Diego Lira, hubiera cumplido con la ley al interponer solo denuncias para que los tribunales investigaran si había cometido delitos, pero en modo alguno haber interpuesto querellas en su contra-; o, desde la dictación del sobreseimiento temporal de la causa criminal de fecha 23 de diciembre de 2010.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, sobre el particular, esta Magistrada comparte plenamente lo establecido por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, que en causa Rol 12.221-2017, caratulada “Erices Contreras, Karem con Fisco de Chile”, expone en su motivo décimo: “Que, sobre este tópico, tanto la doctrina y jurisprudencia uniforme de esta Corte se encuentran



contestes en el sentido de aseverar que no existe duda respecto a que el cómputo de la prescripción extintiva se inicia en la fecha exacta en que se consumó el hecho generador del daño, no antes ni después. En efecto, nuestro legislador, a fin de evitar dudas, es intencionadamente claro en la redacción de la norma pertinente, siendo únicamente posible entender de su tenor literal, que la acción en referencia prescribe en cuatro años contados desde el día en que se cometió el ilícito y no desde la data en que se produjo el daño, ni desde que concurra sentencia penal condenatoria, como pretenden los jueces impugnados; de otro modo, se tuerce la clara intención de la ley plasmada en la redacción de la norma”.

“Pues bien, sostener lo contrario o alguna postura distinta, conllevaría eventualmente a la conclusión de que el cómputo del plazo de prescripción, en algunos casos, debería iniciarse desde una fecha diferente a la del nacimiento del derecho, o a aseverar que toda acción de responsabilidad extracontractual necesariamente requeriría para su interposición, el antecedente de una sentencia penal condenatoria, yerros irredimibles desde la perspectiva de nuestra institucionalidad jurídica que distingue entre la responsabilidad civil y la penal, áreas independientes y autónomas”.

DÉCIMO OCTAVO: Que, continúa el fallo en su considerando décimo tercero señalando “Que, además, yerran los sentenciadores del mérito al considerar que la existencia de una sentencia criminal condenatoria por la comisión del hecho que fundamenta la acción deducida, es la que permite la apertura del plazo de prescripción extintiva, condicionando el inicio de su cómputo, no a la perpetración del hecho, como ordena la norma pertinente, sino al resultado del proceso penal, olvidando que la circunstancia de que no exista un pronunciamiento judicial condenatorio en sede criminal, no impide en caso alguno que se tenga por establecido en sede civil la perpetración del hecho ilícito que genera el daño, de modo que ningún efecto condicionante provoca en la causa llevada en sede civil, desconociendo la diferencia esencial entre la responsabilidad criminal y la responsabilidad civil, por la cual no es requisito de esta última la declaración previa de la primera”.



Y sobre este punto, agrega en su fundamento décimo cuarto “Que, pues bien, incluso en el evento que se considere que la obtención de una sentencia condenatoria penal era imprescindible para que acción civil prospere, corresponde de todos modos al actor iniciar gestión en dicha sede antes de la llegada del plazo de prescripción, contado desde la ocurrencia del hecho ilícito, pues para ello nuestro ordenamiento jurídico contempla la posibilidad de solicitar la suspensión del procedimiento hasta la terminación del proceso criminal, conforme lo establece el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, norma que ha sido soslayada por los sentenciadores del fondo, incurriendo a su respecto, en error por no aplicación”.

DÉCIMO NOVENO: Que, en este orden de ideas, la sentencia citada, concluye en su motivo décimo octavo “Que, en efecto y siguiendo el hilo conductor de lo planteado, no es menester la existencia de una sentencia penal condenatoria para deducir la respectiva demanda civil, desde que la ley no exige tal decisión como presupuesto de la acción de responsabilidad extracontractual”.

“De este modo, las posibilidades que nuestro sistema jurídico otorga para ello, no dependen de la existencia de una determinada decisión en otra sede, pues las actoras pudieron accionar sin ella dentro del término de los cuatro años contados de la manera ya expresada, deduciendo la pertinente demanda civil en juicio ordinario, y acreditar en dicha sede los presupuestos de la responsabilidad extracontractual, o utilizar la herramienta que otorga el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, solicitando la suspensión de la causa civil, mientras se obtiene la sentencia penal”.

VIGÉSIMO: Que, entonces, en virtud de lo que se ha venido relacionando y razonando, resulta forzoso colegir que, contrario a lo que sostiene el actor, su derecho a interponer la acción por responsabilidad extracontractual no nace al momento de dictarse el sobreseimiento temporal de la causa, sino que goza de él desde la ocurrencia del hecho que estima como dañoso, esto es, desde la interposición de la querella, por lo que si estimaba que lo que se decidiera en sede penal pudiera tener influencia en el



juicio civil, el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil le daba derecho a pedir que se suspenda el juicio civil hasta la terminación del proceso penal.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, así la cosas, solo cabe concluir que entre la fecha de la perpetración del acto -10 de agosto de 2005- y la fecha de la notificación de la demanda, esto es, 07 de mayo de 2014 a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, y 05 de octubre de 2015 a don Diego Lira Silva, según consta a fojas 19 y 49 respectivamente, transcurrió en exceso el plazo de cuatro años establecido en el artículo 2332 del Código Civil, por lo que la acción intentada se encuentra prescrita, siendo la propia inactividad del demandante, al haber ejercido tardíamente su decisión de hacer valer su derecho a indemnización, la que hace que la acción haya prescrito.

Por consiguiente, será necesario acoger la excepción de prescripción opuesta por los demandados, encontrándose, por lo tanto, extinguida la acción, tal como se dirá en definitiva.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, en consecuencia, y atendido lo que se resolverá en definitiva, el Tribunal no emitirá pronunciamiento sobre las demás acciones, alegaciones y defensas deducidas, por ser incompatibles con lo resuelto.

VIGÉSIMO TERCERO: Que, los demás antecedentes y pruebas existentes en autos, en nada alteran lo concluido precedentemente.

Fundamentos por los cuales y visto además, lo dispuesto en los artículos 1437, 1698, 1700, 1701, 1702, 2314, 2332, 2492 y 2514 del Código Civil; y, 144, 160, 170, 254 y 342 y 346 del Código de Procedimiento Civil, Se Resuelve:

I. Que, se acoge la excepción de prescripción opuesta por los demandados don Diego Silva Lira y Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, y como consecuencia de ello, la demanda deducida a fojas 2 y siguientes, es desestimada.

II. Que, se omite pronunciamiento respecto de las restantes acciones, alegaciones y defensas opuestas, por ser incompatibles con la recién aceptada.



III.- Que, se condena en costas al demandante.

Regístrese.

Notifíquese y archívense los autos en su oportunidad.

**PRONUNCIADA POR DOÑA MARÍA PAULA MERINO
VERDUGO. JUEZ TITULAR.**

**AUTORIZA DON JUAN JOSÉ LAZCANO RUIZ. SECRETARIO
SUBROGANTE.**

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintidós de Agosto de dos mil diecinueve**

